

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

Vobis etiam merito accepta referimus, qui tam strenue religionis, et
justitiae partes tuendas suscepistis....

DIARIO CATOLICO, APOSTOLICO, ROMANO.

Deumque, cuius causam agitis, rogamus ut vos in proposito confi-
met.—Este IX al director y redactores de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Madrid 12 rs. al mes.—En Provincias 17 rs. al mes, y 50 por trimestre en casa de los
comisionados, y 15 rs. al mes y 42 el trimestre en la administracion.—En el Extranjero: 70 rs.—En Ultramar: 90
reales trimestre.—La administracion no responde de los sellos que se le remitan en carta sin certificar.

PUNTOS DE SUSCRIPCION.—Madrid: En la administracion, Pelayo, 38 y 40, cuarto principal de la derecha.—Provincias:
En los puntos que se anuncian el último día de cada mes.—Paris: Agencia franco-española de D. C. A. Saavedra, 55,
rue Taibout.—Buenos Aires: D. Francisco Zudaire, Presbitero.—No se devuelve ningún manuscrito.

A LAS CORTES.

El proyecto de ley de 22 de Marzo último, presentado a las Cortes por el señor ministro de Gracia y Justicia, no ha podido menos de producir una dolorosa impresion, como es fácil conocer, en el ánimo de los que tenemos la misión divina de regir la Iglesia española. No me parecía posible que un ministro, a quien yo mismo he oído desde esos escaños decir que él profesa la Religión católica, debiendo por sus estudios especiales conocer bien la naturaleza y organización de la Iglesia, en la cual está encarnado el Catolicismo, tuviese valor para presentar un proyecto de ley que tan poca armonía guarda con los principios católicos y con la disciplina que la Iglesia con autoridad recibida de Dios ha establecido para su gobierno.

Al ver la perturbación universal que en la organización de la Iglesia española pretende introducir el señor ministro, cualquiera diría que desconoce el principio católico y fundamental de que la Iglesia no es un ramo de la administración civil, porque Dios la hizo independiente de los Gobiernos temporales. Así como el soberano temporal nombra el personal de la administración civil con entera independencia de la Iglesia, así también el Soberano espiritual nombra el personal para la administración eclesiástica independientemente del poder civil. ¿Consultaron por ventura los Apóstoles a Naron para constituir Obispos en diversas ciudades, y estos para establecer Presbíteros que los auxiliasen en la predicación y administración de Sacramentos? El señor ministro sabe que no, porque sabe que el César dirigiese los negocios civiles de los pueblos, y que los Apóstoles y sus sucesores rigiesen la Iglesia de Dios estableciendo así la distinción entre las dos potestades con que había de gobernar el mundo desde la publicación del Evangelio. Todo esto es elemental en el derecho público eclesiástico y en el de las naciones cristianas, y no puede ocultarse al señor ministro que lo ha estudiado.

Sin embargo, parece que no lo ha tomado en cuenta al escribir el proyecto de arreglo de la Iglesia española. En el artículo 19 ordena, «que el palacio, los sitios reales y territorios exentos de las Ordenes, entren desde luego a formar parte de la diócesis en que se hallan enclavados.» Pero aunque sea conveniente esta reforma, ¿quién ha dado al Estado la potestad de transmitir de unas personas a otras la jurisdicción espiritual, y hacer que desde luego se incorporen unos territorios a otros, a que antes no pertenecían en el orden espiritual? Esto es un acto de soberanía que no puede atribuirse el poder civil, sin confundir lastimosamente las dos potestades, que el Hijo de Dios quiso fuesen distintas desde la fundación de su Iglesia. El señor ministro, pues, ha desconocido prácticamente el dogma católico de la distinción de las dos potestades, aunque la admita en teoría, como tiene que admitirlo si quiere continuar siendo católico.

Las Cortes no podrán menos de conocer también que el señor ministro se aparta de las ideas más obvias del derecho público eclesiástico, al abolir toda potestad coercitiva de la Iglesia respecto de las personas eclesiásticas. En los artículos 2.º y 3.º se establece que ningún eclesiástico podrá ser detenido o preso, ni obligado a mudar de domicilio por la autoridad eclesiástica, de modo que a un eclesiástico escandaloso con aquella clase de escándalos, que no se castigan en el Código civil, ya no puede un Obispo recogerle en una casa de corrección. Comprendo que el señor ministro ha querido que los eclesiásticos gocen de los derechos individuales consignados en la Constitución. Pero no ha tenido presente que la Iglesia a nadie obliga a que se haga eclesiástico, sino que cada uno entra en esta clase por su voluntad, y al ordenarse el Presbítero promete expresamente obediencia a su Obispo, renunciando por consiguiente a ejercer sus derechos individuales en lo que sea necesario en el nuevo estado que abraza, como un criado renuncia al entrar a servir a un amo al uso que antes podía hacer de ellos. El que un Obispo, pues, no por capricho, sino por justas causas, ordene que un eclesiástico mude de domicilio, o se recoja por algún tiempo en una casa de corrección a meditar sobre sus extravíos para volver al buen camino, es una cosa que ningún hombre razonable puede vituperar, antes bien, tiene que aprobar este ejercicio de una potestad paternal encaminada a la corrección de un hijo extraviado que ha prometido obediencia al que ha elegido por padre espiritual. La moral pública está interesada en que un Obispo pueda aplicar este género de correcciones a los eclesiásticos que sirven de poca edificación a los fieles, y en ello ninguna usurpación se hace al poder civil, puesto que ellos mismos se han sometido voluntariamente a esta saludable disciplina de la Iglesia.

Por el artículo 16 se trasmite el ejercicio del real patronato en la provisión de curatos a las respectivas parroquias, y esta es una novedad poco conforme con los principios generales de derecho. El patronato de la corona está regulado por los mútuos convenios que han mediado en este asunto, y el Estado no puede alterar sus condiciones sin el consentimiento de la Iglesia que se lo ha otorgado. El nombramiento de los Curas es evidentemente propio de la autoridad

eclesiástica, como lo es de la civil el de los magistrados, gobernadores y alcaldes; y si la potestad temporal tiene hoy alguna intervención en este asunto, es por una concesión, por una especie de delegación que la Iglesia ha hecho a los monarcas católicos, y es sabido que el delegado no puede subdelegar sino bajo las condiciones establecidas en el derecho; y la Iglesia no ha transmitido a la corona de España el derecho de delegar a las parroquias la facultad de elegir en la persona que presente el Obispo para proveer una vacante. Todo esto parte también del principio de la confusión de las dos potestades, suponiendo tácitamente el señor ministro que el Estado es dueño de ejercer el patronato de la manera que le parezca, como sin disputa puede formar según crea conveniente una ley de ayuntamientos, de diputaciones provinciales ó del orden judicial.

En el artículo 15 se dice que los derechos de estos y pié de altar no tendrán el carácter de obligación civil, recordando en su consecuencia su primitiva naturaleza de obligaciones voluntarias. Esta consecuencia es la que yo niego, aunque el Estado se desentienda de auxiliar a la Iglesia para cumplir sus disposiciones canónicas. La Iglesia puede establecer leyes que obliguen en conciencia, como las ha establecido siempre, aunque el Estado no le preste su cooperación; y si las obligaciones en un principio fueran voluntarias, la Iglesia con el tiempo ordenó que fuesen obligatorias; porque los fieles tienen obligación de sufragar los gastos del culto y sus ministros, obligación consignada en el Evangelio y en los escritos de los Apóstoles.

Si en el proyecto de ley de 22 de Marzo se conculcan los principios más obvios de la Religión católica, no son más respetados en el proyecto adicional. En este se permite su autor proponer respecto de la Iglesia lo que se permitiera respecto de los ramos de la administración civil que él dirige. El podría presentar un proyecto de arreglo de tribunales, suprimiendo cierto número de Audiencias, de Juzgados de primera instancia, bajando las dotaciones del material y del personal arbitrando medios para cubrir los honorarios, etc.; y como si la Iglesia estuviese del mismo modo dependiente del Estado, se suprimen diócesis, se rebaja la categoría de otras, se dejan Obispos cesantes, se reduce el número de prebendados y beneficiados arbitrariamente, se suprimen las colegiadas que quedaban subsistentes por el último Concordato, como también los coadjutores de los párrocos que tienen el mismo origen; se dá a los fondos del indulto cuarentesimal un destino diverso del que les ha dado el que ha concedido esa gracia a los españoles; se pretende que los intereses de los títulos del 3 por 100 procedentes de la redención de cargas piadosas se destinen a cubrir las dotaciones del culto y sus ministros contra la voluntad de los piadosos fundadores; se impone una contribución nueva y odiosa, sin eliminar del presupuesto los millones que se venían pagando hasta aquí para el sostenimiento del Culto y Clero como indemnización de los bienes eclesiásticos de que se ha apoderado el Estado.

El autor de la Rusia, que se cree jefe de la religión de sus súbditos, no ha hecho tanto con la infeliz Polonia para amoldarla a su política. ¿Y a qué se encamina toda esa desorganización que se pretende introducir en la Iglesia española? Se encamina, no diré a envilecerla, empozoándola, porque no puedo suponer tan dañada intención respecto de su madre en uno que se llama su hijo, pero sí a descargar el presupuesto de la partida que con más justicia figura en él, después que el Estado ha confiscado el patrimonio que la habían legado los siglos para proveer a su subsistencia sin pedirle nada. Fuera mejor que se dijese francamente que el Estado no puede, ó no quiere, pagar esa deuda de justicia a la Iglesia española, y que esta arbitre medios para proveer a su subsistencia. Esto tendría, a lo menos, el mérito de la franqueza, y sabríamos por lo tanto a qué atenernos. Pero proponer unos medios de dotación que en gran parte están fuera de las atribuciones del poder civil, y en otra son ilusorios ó odiosos para el Clero, y hablar al mismo tiempo de patronato en la provisión de piezas eclesiásticas, es una cosa peor que la separación de la Iglesia y del Estado, porque no es proclamar la Iglesia libre en el Estado libre, sino la Iglesia avasallada por el Estado. Y esto es una cosa tan opuesta a la libertad de que nuestro Señor Jesucristo la dotó, que antes que consentir en ello, arrostraría todos los infortunios que pudiesen sobrevenirle.

La Iglesia sufrió en los primeros siglos la prueba de la persecución; ha sufrido después la prueba de la protección. Hoy, es verdad, no tenemos todavía los cirios para arrojar los cristianos a los leones; pero tampoco tenemos la antigua protección que a lo menos no permitía declarar guerra a Dios, ni autorizaba la guerra de las pasiones contra la Iglesia. Hoy se halla en una situación nueva. Se la dice que está sujeta al derecho común proclamado por la libertad; que el Estado la protegerá solo contra la fuerza material como a las demás religiones. Y en esta situación, después que ha sido despojada de sus medios de subsistencia y de enseñanza, después que han desaparecido sus institutos religiosos y muchos de sus templos, después que se ha secularizado la enseñanza, ni aun se quiere guardar respecto de ella la neutralidad que dada la

hipótesis exigía la equidad natural, sino que todavía se la acusa. Se la quiere negar la indemnización de los bienes de que ha sido despojada, y como una negativa clara sería una cosa algo dura para muchos que conservan todavía el sentimiento de lo justo, de ahí el sustituirlos con unos arbitrios de que no puede disponer el Estado, ni la Iglesia destinar a las dotaciones de sus ministros, y con la imposición de una contribución odiosa que servirá en gran manera para desprestigiar a los ministros de la Religión. La Iglesia no puede aceptar esa forma de indemnización que se quiere sustituir a la que venía observándose hasta aquí, no precisamente porque se varíe la cuota, sino por lo que ya llevo indicado respecto del destino de algunos de los arbitrios que no pueden variarse, y porque si no se bajan del presupuesto general los 180 millones de reales a que se dice ascendía el presupuesto de las obligaciones eclesiásticas, el pedir al pueblo una nueva contribución para el Culto y Clero, sería excitar una odiosidad contra el Clero que con nada podría aplazarse, sino con la renuncia a ese género de arbitrio. El pueblo, que si tiene una admirable lógica fundada en los hechos, no se atreve a distinguir entre lo que es causa y lo que es simplemente ocasión de que se le duplique el impuesto, se enfurecería contra el Clero, que sería la ocasión inocente de su nuevo gravamen. Todo lo sufriríamos antes que aceptar tan desventajosa situación. nos abandonaríamos a la Providencia, y viviríamos en medio de todas las privaciones antes que anular nuestro ministerio.

Por las ligeras indicaciones que van expuestas, me atrevo a rogar a las Cortes se sirvan desechar los dos proyectos que el señor ministro de Gracia y Justicia ha presentado contra el Clero, dejando que la Iglesia española continúe rigiéndose de la manera concordada con el jefe de la religión católica, y no de la manera que ha discurrido el señor ministro conculcando los principios del derecho público eclesiástico y de la justicia universal.

Santiago, 20 de Abril de 1870.—EL CARDENAL ARZOBISPO.

CORTES CONSTITUYENTES.

Extracto de la sesión celebrada el día 25 de Abril de 1870.

PRESIDENCIA DEL SR. D. MANUEL RUIZ ZORRILLA.

Abierta la sesión a las tres menos cuarto, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

El Sr. Rodríguez (D. Gabriel) apoyó una proposición para que las Cortes nombren una comisión a fin de que examine las operaciones de todas las sociedades de seguros establecidas desde 1848 en España y propongan lo que crea conveniente.

Aseguró que la mayoría de dichas sociedades ha defraudado todas las esperanzas y los caudales de los accionistas.

Además de las causas generales del decaimiento industrial, había seguramente causas interiores a las mismas sociedades, causas que convenía aclarar.

Refirió detenidamente la historia de la constitución de la *Tutelar* y de sus vicisitudes, llamando la atención del Congreso sobre las irregularidades en que abundaba.

Aseguró que la información podía ampliarse a las sociedades de ferro-carriles y en unas y otras podrían encontrarse historias como la que había referido de la *Tutelar*.

El señor ministro de Ultramar contestó, que si los interesados hubiesen podido acudir en cada caso a los tribunales de justicia no hubieran pasado ciertos abusos.

Dijo, que el Gobierno aconsejaba que se aceptase la investigación parlamentaria que pedía el Sr. Rodríguez.

El Sr. Moya dijo que las operaciones de la *Tutelar* de que se había quejado el Sr. Rodríguez eran anteriores a su nombramiento de delegado de dicha sociedad.

El Sr. Rodríguez rectificó y dijo que si la comisión se ampliaba a las sociedades de ferro-carriles en vez de ser de la individuos fuera de 21.

El Congreso tomó en consideración la proposición, y acordó discutirla en el acto, aprobándola sin debate con la ampliación indicada por el Sr. Rodríguez, y que el ministro de Ultramar propusiera también.

Se aprobó una proposición de ley concediendo una pensión a doña Dolores Castejón.

Continuó el debate acerca de la ley electoral.

Se desechó sin debate una enmienda al artículo 47 que había presentado el Sr. Pico.

Se aprobó dicho artículo.

Se desechó otra enmienda al art. 18 defendida por el Sr. Benot, a quien contestó el señor marqués de Sardená.

Se aprobaron los demás artículos hasta el 81. Los siguientes hasta el 84 fueron retirados para introducir en ellos varias modificaciones a instancias de la comisión.

El Sr. Rojo Arias apoyó una enmienda al 110 para que la elección se hiciera por provincias y no por distritos.

El Sr. Fuente Alcázar, de la comisión, combatió la enmienda sosteniendo las ventajas de la elección por distritos; explicando antes que el sistema a él método de la elección no era ni fue nunca cuestión dogmática, sino puramente de conducta según el partido que planteaba una ley electoral.

El Sr. Rojo Arias rectificó y retiró su enmienda.

Se levantó la sesión para que se reuniera el Congreso en secciones.

Eran las seis menos cuarto.

Continuando la sesión a las diez, se entró en el debate sobre el proyecto de autorización para plantear los proyectos de ley presentados por el señor ministro de Gracia y Justicia, dijo:

El Sr. OCHOA (D. Cruz): Señores diputados: principio dando las gracias a la Cámara y al se-

ñor presidente por la benevolencia que me dispensaron la noche del viernes; y después de cumplir con este deber, entro desde luego en la cuestión.

Se trata, señores, aquí de un proyecto incalificable, no discutiéndose en realidad más que del planteamiento del matrimonio civil. Puede decirse que este no es proyecto de autorización, ni ordinario, aunque participa de los dos caracteres a la vez, pues se someten en algunos artículos a la deliberación de la Cámara varios proyectos en la forma ordinaria, y en otros se propone autorización para plantear diferentes leyes con el carácter de provisionales.

Yo hago gracia de todos los demás proyectos que se comprenden en el dictamen, y voy a concretarme a tratar solo del proyecto del matrimonio civil; y prescindiendo de la forma en que viene, porque esta es indiferente para la misión que yo tengo que cumplir, aun cuando pudiera decirse que esta no hacia mucho honor al Gobierno ni a la comisión, principiaré por examinar qué es lo que significa el planteamiento de ese proyecto, y cuál es el punto objeto que tenemos al querer establecer en España el matrimonio civil.

Este proyecto representa el coronamiento de las opiniones que aquí se han sentado y el camino que se ha emprendido. Aquí se ha hablado mucho por todos de la revolución de Setiembre; pero no ha sido bien apreciada hasta que el señor Bugallal, haciéndose cargo de lo dicho por ciertos periódicos sobre determinados propósitos del señor ministro de Fomento, preguntó si se trataba de prohibir la enseñanza del catecismo en las escuelas. Aquel día se fijó el carácter de la revolución de Setiembre.

Vosotros mismos habéis dicho que en la revolución entraron dos elementos, la idea y la fuerza; esta hizo su papel en Cádiz y en Alcolea; la idea tenía que hacer el suyo después; pero teniendo que la fuerza no le prestara su apoyo, los que tenían la idea permanecieron unidos con los que representaban la fuerza, hasta que por la necesidad de las circunstancias se rompió ese consorcio.

Ahora bien; esa idea significa el ateísmo del Estado, y para realizar esa idea habéis tenido que decir a la religión de nuestros padres, que simboliza todas nuestras glorias, que se retire de las leyes, de las escuelas y de la familia.

Pero no es fácil, señores, que un poder aleje a otro que es más fuerte que él, porque tiene su predominio sobre las conciencias, sin que tenga celos de él y quiera arrollarlo y suplantarle, y la suplantación en la materia que nos ocupa se viene a hacer por medio del matrimonio civil.

Sin embargo, el asunto sobre que pretendéis legislar no es de vuestra competencia. Yo bien sé que en las doctrinas parlamentarias es un axioma de derecho público que el Parlamento es omnipotente; mas esto ya se ha explicado aquí como debe entenderse, y ya el Sr. Figueras hace pocos días negaba la omnipotencia parlamentaria de las Cortes Constituyentes, diciendo que la limitación la tenían en los poderes de los diputados. Y bien, señores; ¿dónde están vuestras facultades para conceder esa autorización? Algunos podrán tenerla; pero la mayoría no. Si los señores diputados tuvieran esos poderes, se habría visto algo que lo demostrara; habría venido aquí peticiones pidiendo el establecimiento del matrimonio civil, y en la prensa se hubiera sostenido esa idea; mas nada de esto ha sucedido.

Allá en Reus y en alguna otra población insignificante se verificaron caprichosamente algunos llamados matrimonios civiles, que fueron calificados de concubinatos por el Sr. Romero Ortiz siendo ministro de Gracia y Justicia, y no solo fueron concubinatos, sino que hasta había incestos, porque las pasiones desbordadas hallaron el medio de realizar uniones prohibidas por todo derecho. Ni antes ni después se han verificado matrimonios de esa clase en ninguna otra provincia de España; y tal vez a estas horas hayan lamentado los que han contraído esos matrimonios el haber obrado así y no poderlo deshacer porque se oponga a ello a guna fuerza más ó menos autorizada.

Yo cambio, señores, al solo anuncio del planteamiento del matrimonio civil se han alarmado las conciencias, y estáis, a la vez que ciegos, sordos cuando desoís los clamores de la opinión pública y pretendéis dar al pueblo español lo que no quiere recibir, cuando por otra parte no tenéis facultades para ello.

Hay más: aun cuando tuviérais el poder de hacerlo, no debíais dar esa autorización al Gobierno, puesto que siendo la personificación del Gabinete la misma persona que permitió al señor Romero Ortiz decir que los matrimonios civiles que se habían contraído eran concubinatos, no parece natural que convenga en plantear lo que entonces no le parecía conveniente.

Pero la Asamblea no puede conceder esa autorización por otras razones que son más esencialmente fundamentales. ¿Es el matrimonio un acto de la vida ó un contrato como otro cualquiera, que puede caer bajo la jurisdicción de las leyes civiles? Cuando, en qué pueblos, en qué época ha sido considerado de este modo el matrimonio? Yo quiero que me digáis en qué pueblos y en qué tiempos ha dejado de considerarse como un acto eminentemente religioso. Yo sé que este acto se ha adulterado en los pueblos gentílicos a medida que se han ido separando de lo establecido en la ley mosaica, de lo que tuvo principio en el Paraíso cuando se verificó el gran acto de la creación. (Se notan algunas muestras de hilaridad en varios señores diputados.)

Si no se cree en el Paraíso ni en la creación, si algunos señores diputados son racionalistas, guardémoslo para sí y respeten la opinión de un diputado católico que en uso de su derecho emite su opinión.

El señor PRESIDENTE: Ruego a S. S. que no se exprese de esa manera; pues cualquiera, al oír lo que dice S. S., podría creer que se había hecho alguna protesta contra lo que se estaba diciendo, y nadie ha interrumpido a S. S. en esa sentido.

El Sr. OCHOA (D. Cruz): Suplico a V. S. tenga en cuenta que yo he pronunciado mis últimas palabras al notar cierta hilaridad que se producía en la Cámara cuando he hablado de la creación y del Paraíso; pero no ha sido mi ánimo inferir la menor ofensa a nadie.

El señor PRESIDENTE: Los señores diputados han podido creer que no venía al caso el hablar de la creación y del Paraíso con motivo del matrimonio civil; por lo demás, cada señor di-

putado tiene sus creencias religiosas, y debe ser respetada su opinión.

El Sr. OCHOA (D. Cruz): Tengo tal fe en que en el Paraíso fué donde se verificó el primer matrimonio, que he creído muy del caso manifestarlo aquí y decir que a medida que los pueblos gentílicos se fueron separando de la ley mosaica, se fué desnaturalizando el matrimonio. No obstante si esto parece inoportuno, no seguiré en ese camino; pero quede sentado esto, y que después se eleve a sacramento.

En todos los pueblos, señores, aun en aquellos á donde no ha llegado a brillar la luz del Evangelio, es por regla general, el matrimonio un acto religioso; y prescindiendo de esto, es un hecho que entre los católicos es un sacramento, y que solo a la Iglesia pertenece legislar sobre esta materia, sin que haya en el poder civil fuerza bastante para suplantarla y hacer una legislación independiente en ese punto. Podéis adoptar el medio de la violencia; mas la ley nacera muerta, porque los católicos la considerarán como una impiedad y como un sacrilegio, y la ley no se cumplirá.

Yo, señores, me he levantado, más que para pronunciar un discurso, para formular una protesta, pues esta es la misión que mis compañeros me han encomendado. Tal es la convicción que tenemos en este punto, que juzgamos no debemos contribuir a la adopción de esta ley, ni aun con nuestro voto negativo, y nos abstendremos para daros a conocer con esta actitud pasiva y resistente del pueblo español, no viniendo con nuestro voto a aumentar el número de votantes hasta el necesario para que sea ley este proyecto; y puesto que se trata de un asunto que atañe a las conciencias, nosotros, que somos católicos, pediremos la votación nominal y no votaremos, obrando como vosotros lo habéis hecho en cuestiones puramente políticas; pues es necesario que el país sepa el uso que sus representantes hacen de los poderes que les han dado.

Se dice que al legislar sobre el matrimonio civil no se legisla sobre asunto alguno religioso, pues el contrato es una cosa separada del sacramento. Pero, si bien esto puede ser en abstracto, en realidad no puede sostenerse que hay tal separación. ¿En qué Apóstol, en qué Santo Padre, en qué Concilio habéis leído eso? En ninguno; y esto, aun cuando solo es una prueba negativa, es eficaz; mas hay además una prueba positiva que aumenta la fuerza de la negativa. Las ideas que ahora sustentáis principian con la escuela de Lutero, y han sido sostenidas después por todos aquellos cuyas opiniones han sido anatematizadas por la Iglesia; y por consiguiente los católicos no podemos admitirlas. Esta prueba positiva, unida con la negativa, viene a demostrar la exactitud de la doctrina que yo sostengo.

Pero además hay mil consideraciones que robustecen este argumento. Abrid todos los textos autorizados de la Iglesia, y decidme qué se lee en ellos respecto al matrimonio. ¿Qué es lo que Jesucristo elevó a sacramento? El contrato natural establecido, sancionado y bendecido por Dios a luego de la creación, y no, como queréis vosotros, el contrato civil que ha existido en algunos países. De ese modo se realizan en esa materia la unidad y la universalidad, que es el carácter distintivo de la religión católica.

Y decidme más: al elevar Jesucristo a sacramento ese contrato natural, ¿hizo algo superior que estuviese sobre el contrato para darle el carácter de sacramento? No. Ahí está el Concilio de Trento, ley para los católicos españoles, que confirma esta doctrina, y el cual, después de establecerla, da luego la consecuencia de que no se puede celebrar el matrimonio de otra manera, y hace irritos y nulos todos los que no se verifican así. Pues nosotros cumpliremos el Concilio de Trento, que es nuestra ley, y suceda lo que quiera diremos: *obediendo Deo magis quam hominibus oportet*.

Pero no hay solo autoridades eclesiásticas y razonamientos religiosos para convencer de que es inseparable el contrato del sacramento. Hay un argumento deducido del proyecto mismo, que al consignar que el matrimonio es perpetuo é indisoluble, demuestra que esta fuerza del vínculo matrimonial no puede nacer de la ley civil; porque si así fuera, podría ese contrato regularse por las leyes civiles deshacerse como los demás por un acto contrario. La comisión y el señor ministro de Gracia y Justicia han hecho perpetuo é indisoluble el matrimonio, porque realmente no es un contrato civil, y su fuerza viene del vínculo sacramental.

Y paso hipotéticamente por alto todo lo que he dicho hasta ahora. Yo pregunto a la comisión y al Gobierno, si aunque no sea popular este proyecto, es justo, necesario, ni siquiera útil. ¿Creeis que lo es? Pues entonces ¿por qué no lo habéis presentado antes? ¿No lo creéis así? Pues entonces, ¿por qué lo presentáis ahora? En cualquiera de ambos casos habéis procedido sin conciencia política al sacrificar a vuestras alianzas ó enemistades los intereses del país y vuestras propias ideas y convicciones.

Aquí lo que hay es que se hizo una conciliación entre elementos que no podían fusionarse, y sin embargo esa conciliación quiere sostenerse a costa de sacrificios por parte de los democráticos que han renunciado a la completa aplicación de sus principios en la esfera del Gobierno, y por parte de los unionistas que han sido ministros con una Constitución basada en el espíritu religioso, y han tenido ahora que aceptar el art. 21 de la de 1869, que se presta a ser interpretado como resulta de este proyecto.

Me diréis que esto que yo indico es precisamente el mérito de esa Constitución, dentro de la cual pueden agitarse parlamentariamente conservadores y reformistas. Pero de aquí nace la perturbación para el país, pues no es en el fundamental donde puede haber esa diversidad de opiniones que encareceis; y la conducta de la unión liberal en este asunto, que yo aplaudo, manifiesta claramente que no puede haber ese juego de los partidos, ni armonía alguna.

Pero me diréis que alguna utilidad resultará del matrimonio civil. Es verdad. ¿Sabéis cuántos son los favorecidos por este proyecto? Los concubinarios de Reus. (El Sr. Benot pide la palabra). A este proyecto se le da una gran fuerza retroactiva en beneficio únicamente de los que celebraron esos concubinatos é incestos en Reus y otros puntos. Y es lamentable que una persona tan digna é ilustrada como el Sr. Benot autorizara lo que allí se ha hecho. Yo lo deploro de todo corazón, porque sé que sólo por complacer a algunos habitantes de ese pueblo, de que fué

alcaldes el Sr. Bové, ha podido autorizar seas uniones.

En cambio de algun escaso bien que pueda esto producir, que de males no puede causar? Por de pronto está el mal general de que al que no contraiga este enlace de la manera que se va a establecer se le priva de efectos civiles, que es como privarle de todo lo que constituye la vida social.

Además, si fuera este el único mal que puede causar el matrimonio civil, si fuera solo el que dentro de pocos años los hijos del verdadero matrimonio van a verse privados de todos sus derechos! Pero hay otros muchos males, y sobre todo, el mal de que la poligamia puede ser un hecho cuando se quiera. ¿Considerará la ley civil matrimonio al sacramento, y por consiguiente, impedirá no dirimente a esa union, para celebrar otro entre una persona unida ya sacramentalmente con otra que no lo esté? Si esas uniones son independientes, si el sacramento del matrimonio no es impedimento para el matrimonio civil, es muy posible que se realice la poligamia.

Figuráos que mañana se celebra una union ante el magistrado civil, y que por no haber pacto de sacramento llega un día en que uno de estos se presenta ante el Párroco a celebrar el sacramento del matrimonio. ¿Creeis que no se verifícará la poligamia? ¿No sabéis que no es impedimento para la celebración del sacramento esa union civil? El Párroco aconsejará que celebre el casamiento con la primera con quien se unió civilmente; pero si se empeña en casarse con otra mujer, ¿creeis que no se casará sacramentalmente? Pues se casará, y le tendremos casado civilmente con una, canónicamente con otra.

Quiero suponer más: que ese Párroco se niega a autorizar ese sacramento. Pues así entonces puede consumarse y llevarse a cabo la poligamia; y es necesario de aquí dar la voz de alerta, sobre todo a la mujer, que es la que más ha de sufrir. Ya sabéis que la union del matrimonio es válida aunque se realice por un Párroco que haya sido sorprendido, con tal de que se realice en su presencia. Celebrarán el sacramento en pecado mortal; pero el sacramento es perfecto e indisoluble, y resultará que el contrayente tendrá una mujer por el matrimonio civil y otra por el sacramental. Pues volved la hoja: lo mismo puede suceder con el matrimonio sacramental. Si después de verificado esto quiere uno casarse con otra civilmente, ¿no lo hará? Ciertamente que sí, porque por esta ley el matrimonio canónico no es un impedimento. Es, pues, necesario anunciar este mal y prevenir a la sociedad; porque contra este mal no basta ni la resistencia pasiva ni la insurrección de la conciencia.

Pero hay más: esa poligamia puede existir dentro de la legislación civil. ¿No habéis pensado lo ridículo de las formalidades para la celebración del matrimonio civil? En nuestro país, sobre todo en los pueblos pequeños, donde nadie inscribe la propiedad, ¿creeis que irán a celebrar el matrimonio ante un juez municipal que pocas veces sabrá leer ni escribir? Entre las formalidades previas para la realización del matrimonio civil figura la de los edictos. Prescindiendo de que el promotor fiscal de los impedimentos, y de que los síndicos desempeñen en los pueblos pequeños el papel del promotor; y paso a mi asunto.

Resulta, según el proyecto de ley, que tienen que anunciarse esos edictos durante quince días. Pues figuráos que unidos dos civilmente en Madrid, el marido, mejor dicho, el hombre, se traslada a Ultramar, o al extranjero, donde por cualquier causa no le quiere seguir la mujer; y en castigo de esta resistencia, cuando vuelve se dirige a otro punto de España, y a los dos años y un día se presenta a la autoridad civil diciendo que está soltero, y celebra otro matrimonio que al cabo de algun tiempo se descubre. Ahí tenemos como dentro de la legislación civil puede haber tambien poligamia.

Otro mal grave tiene, señores, este proyecto, y es que hace perder el pudor y el decoro matrimonial, que es imposible que existan sin la consagración religiosa. En el matrimonio cristiano ese pudor y ese decoro existen, porque todo lo envuelve allí la consagración religiosa; pero decir que los que quieren realizar esa union van al juzgado municipal y allí celebran su contrato, material, y grosero y fúero como todo lo que sucede en el juzgado, pueden considerarse con ese respeto, con esa veneración, con ese pudor con que se miran los matrimonios cristianos, es imposible. ¿De dónde le viene la fuerza a ese acto para que no se pierda con él el pudor? Yo estoy seguro de que ninguna mujer que se estime irá a ese juzgado lleno de rubor, y hasta el hombre mismo no podrá hacerlo.

Otro mal gravísimo va a resultar, y es, que ese acto que queréis llamar perpetuo quedará sujeto a la mutabilidad de las leyes humanas. ¿Qué razón tenéis para creer que eso será duradero e inmutables? ¿Dónde que se haya desnaturalizado el matrimonio ha sido perpetuo? Recordad las legislaciones y vereis que, donde ha sucedido eso, lo que debía ser fundamento de la sociedad ha sido fundamento de su degradación.

Introducís una novedad que lleva una antinomia en nuestro derecho, que dice que de cualquier modo que quiera el hombre obligarse queda obligado, y vosotros rompéis los espasmos; y además en el proyecto se prohíbe contraer matrimonios a los ancianos, siendo así que el fin del matrimonio es el mutuo auxilio, y nunca hace falta este más que cuando la edad es avanzada.

Estas son, entre otras, la igualdad ante la ley. Pues si queráis igualdad, ¿para qué habéis establecido la libertad de cultos, que lleva consigo una diversidad tan grande? ¿Es posible que el Sr. Madrazo haya sostenido la necesidad de este proyecto por la igualdad ante la ley? Pues qué, ¿sería conveniente que por la igualdad ante la ley, un Estado ateo quisiera establecer un bautismo y una confirmación suyos especiales? No; la igualdad ante la ley tiene que ser formal, no material; hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre los diversos individuos de la sociedad; y carles esa igualdad que vosotros queréis, es lo mismo que si hicierais un número de vestidos idénticos, iguales al de todos los individuos de la nación española, y se los hicierais poner, se pena de severísimos castigos, lo mismo al anciano que al niño, a la mujer que al hombre, al alto que al bajo.

¿Qué diríais de una ley rentística que, porque hay ciertas clases que pagan una determinada contribución se le quisiera aplicar a todos? ¿No habéis hecho la ley de quintas llamando al servicio de las armas a los que tienen 20 años? Pues esa ley según vuestro criterio, no es una ley de igualdad, porque no obliga a todos. ¿Por qué si establecis esas leyes solo para ciertos españoles, no les dejáis a los católicos que realicen su matrimonio, que tiene más formalidades y más hermosas que ninguna de las que podéis pensar? En esto no se ve más que vuestra estoloidad, el deseo de ensalzar a ese Estado que queréis que lo abarque todo. No se invoca, pues, la igualdad del derecho, porque lo que se quiere es establecer una uniformidad imposible.

Pero hay más: ¿es justo establecer aquí el matrimonio civil para evitar conflictos entre la Iglesia y el Estado, cuando durante una porción de tiempo han vivido en la más completa armonía esos dos poderes? ¿Qué choques ha de haber sin este proyecto? Ninguno; cuando pueden existir es con el proyecto. Por esta duplicidad de legislación será por la que se agitarán males y gravísimos que no quiero repetir para no molestaros demasiado.

Y no quiero haceros cargo de otra razón que decía la primera noche que de esto tratamos el Sr. Torres Mesa. S. S. nos decía con su imperturbabilidad y su calma, que el estado debía intervenir en la union civil, porque el matrimonio era una cosa en alemán que yo no entendí, y porque la Iglesia tomó la parte fundamental de su legislación del derecho romano. ¿Dónde, señor Torres Mesa, ha encontrado S. S. en la legislación romana algo que se refiera a la perpetuidad, indisolubilidad y santidad del matrimonio? ¿Dónde ha encontrado S. S. el mutuo consentimiento? ¿No recuerda S. S. que allí existía el divorcio? ¿Es acaso en la santidad donde encuentra S. S. la analogía entre el matrimonio cristiano y el pagano? No, Sr. Torres Mesa; no tomó nada la Iglesia de la legislación romana.

Voy, señores, a concluir, porque no pensaba haber sido tan extenso: dispensadme porque os he molestado, y tened en cuenta que os hago gracia de los demás proyectos, y que este discurso es una protesta, mal razonada, sí, pero enérgica, contra un proyecto que los que pertenecemos a cierta escuela consideramos opuesto a lo más caro y más sagrado que hay en España, que consideramos tiránico y sentado sobre fundamentos vacíos de razón, que consideramos como la estatulatría, que nosotros hemos de impugnar siempre con nuestra más absoluta resistencia.

Suspendida la discusión, las Cortes quedaron enteradas de que el Sr. Moya renunciaba el cargo de diputado por haber sido nombrado director de estadística.

El señor VICEPRESIDENTE (Montesino): Orden del día para mañana: Discusión del proyecto de ley electoral.

Idem de organización municipal y provincial. Idem del del de empleados públicos. Idem del de Constitución de Puerto-Rico. Se levanta la sesión.

Era la una menos cuarto.

PARTE EXTRANJERA.

DESPACHOS TELEGRÁFICOS.

(De la Agencia Havas-Bullier.)

PARIS, 25.—El Sr. de Banneville ha remitido al Papa la nota del Sr. Daré, porque esta nota había sido comunicada ya a las potencias católicas, pero parece que prevalecieron las ideas de abstenerse con relación al Concilio y probablemente quedará suspendido el asunto.

Avisos oficiales de Atonas anuncian que los malhechores han asesinado a sus prisioneros ingleses e italianos.

LONDRES, 25.—3 por 100 portugués, a 33 1/4. BARRILLO, 25.—Consolidado, a 25-67 1/2. Diferido, a 25 60.

Bonos, a 63-40.

Subvenciones de ferro-carriles, a 47-90.

LONDRES, 25.—Las autoridades han sido prevenidas de una próxima tentativa de los fenianos. Sus puntos de reunión han sido descubiertos y se han tomado todas las precauciones necesarias.

A primera hora se cotizaban: El 3 por 100 francés a 74-65. El 3 por 100 exterior español, a 24-11 1/2. El 3 por 100 id. exterior, 1867 a 28 11 1/2. El 3 por 100 id., id. 1869 a 28-1 1/2.

EL PENSAMIENTO ESPAÑOL.

MADRID, 26 DE ABRIL DE 1870.

El señor secretario de la Junta Central ha recibido ayer la siguiente comunicación: «PALENCIA, 23 de Abril.

«Excmo. señor conde de Canga Argüelles.

«Esta junta ha acordado asociarse al consejo unánime emitido en la reunión celebrada en Vitoria el día 18 del actual, ante la augusta persona de D. Carlos de Borbon, protestando fidelidad a los principios que simboliza, y para cuya triunfo conservará su inquebrantable union.

«Dignese V. E. poner en conocimiento de la Junta Central, para que determine lo que la parezca conveniente. Somos de V. E. afectísimos seguros servidores Q. B. S. M.—El presidente, Atanasio Pinares.—Vicepresidentes, Tomás Castellanos Herrero.—José del Muro Pastor.—Vocales, Genaro Bové.—Marcos Montoya.—Dario Cossío.—Capitán Lobo.—Pedro Ortega.—Pedro Lucan.—Francisco Mazariego.—Luis Belástá.—Vicente de la Hera.—Manuel Martínez Ortega.—Leonardo Campa Cabo, secretario.—Eduardo Janco Ruiz Cossío, vicesecretario.

El mismo señor secretario recibió ayer los siguientes telegramas:

«Bailén, 25.—Conde de Canga Argüelles.—Junta a nombre partido católico monárquico se adhiera telegrama central al señor duque de Madrid.—Presidente, Soriano.

«Córdoba, 25.—D. Antonio Altuna, Fuencarral, 66.—Junta provincial, prensa local reiteran unánimemente adhesión duque de Madrid, rogando transmisión.—Alarcón.

«García, 25.—Unceta, diputado constituyente.—Junta provincial se une a la adhesión de la central al duque de Madrid.—Cors Blanch.

«Oviedo, 25.—Unceta, diputado.—Junta provincial católico-monárquica Asturias acordó manifestar nuevamente adhesión inquebrantable al señor duque de Madrid.—Argüelles, secretario.

«Santander.—Conde de Canga Argüelles.—Gran manifestación carlista al aire libre en Camargo. «Localizable concurrencia, entusiastas discursos, aplaudidos.—Quijano.

Publicábase, de orden del señor presidente.—El secretario, Conde de Canga Argüelles.

¡VIVA EL REY!

Digan lo que quieran los periódicos liberales, la conducta del partido carlista en estos momentos les está causando asombro. Cuando esperaban verle dividido y se disponían a recoger con fruición los menores incidentes de la exacción que se complacían en anunciar, y cuando, en fin, preparaban sus plumas para hacer caprichosos extractos de alguna escandalosa polémica que tenían por seguro que había de surgir entre los órganos del partido carlista, se encuentran con que nunca ha dado ese partido mayores muestras de intima y sincera union y de robusta vitalidad que cuando sus enemigos le declaraban muerto.

Gracias, más que a la policía del Gobierno, a que la reunión de La Tour ha sido una solemnidad cuyos secretos han confiado los mismos carlistas al telegrafo, todos los periódicos y especialmente los ministeriales han podido enterarse de lo ocurrido en ella; todos han podido formar la lista de las personas que por invitación de D. Carlos han concurrido a su residencia y todos han po-

dido saber de qué se trató, cómo se trató y qué resoluciones se acordaron. Pues bien; nosotros retemos a los periódicos liberales a que publiquen todo lo que sepan y a que comparen el espectáculo magnífico y conmovedor que dieron los representantes del partido carlista reunidos el día 18 en la modesta casa de campo que habitan los duques de Madrid a orillas del lago de Ginebra, con el espectáculo que antes y después de la revolución de S. tiembre están dando los partidos liberales.

Son nuestras noticias, han sido de ciento a ciento diez las personas que han acudido al llamamiento del señor duque de Madrid; mas algunas de ellas, a pesar de haber aprovechado todos los momentos, no han podido llegar a La Tour para el día designado, de modo que en la reunión solo tomarán parte unas ochenta y ocho.

Entre ellas figuraban varios grandes de España y títulos de Castilla muy conocidos entre la aristocracia española y extranjera, ricos propietarios de casi todas las provincias de España, publicistas de mérito universalmente reconocido, y un gran número de veteranos de la guerra civil, algunos de los cuales viven en la emigración hace más de treinta años. De todos esos concurrentes, los menos habían sido invitados nominalmente: la mayor parte había acudido allí en virtud de las invitaciones generales que se habían dirigido a todas las Juntas carlistas de provincia, compuestas de personas casi todas desconocidas para D. Carlos, o a los directores de los periódicos carlistas. No era, pues, una reunión de personas cuya opinión acerca de los asuntos de que pudieran tratarse fuera conocida de antemano. Pocas veces se habrá convocado una reunión de carácter político en que pudieran manifestarse con más espontaneidad todas las opiniones.

Pero en la reunión de La Tour no hubo más que una sola opinion, expresada en medio del mayor entusiasmo, en una escena que conmovió visiblemente al joven príncipe y eternizó a los encanecidos defensores de la causa carlista, acostumbrados a sufrir sin inmutarse tantas persecuciones y tantas privaciones, y a exponer su vida en cien combates.

Nosotros, que antes de celebrarse la reunión de La Tour teníamos ya algunos antecedentes para juzgar de lo que en ella podría suceder; nosotros, que después de la reunión hemos recibido algunas noticias de ella, no hemos podido oír ni leer sin conmovernos las relaciones que de palabra y por escrito nos han hecho algunos testigos presenciales.

Nuestros lectores saben ya cuál era el objeto de la reunión. En ella iba a darse cuenta a los representantes del partido carlista de que la persona en quien D. Carlos había depositado toda su confianza, y a quien había investido de omnímodos poderes para que dirigiera como creyera más conveniente los asuntos de su causa, había presentado su dimisión dos días antes de la primavera. D. Carlos, aunque no tenía necesidad de ello, quiso dar a sus partidarios una explicación de las causas por las cuales, a pesar de su voluntad, y después de resistirlo hasta donde le fué posible, había tenido que admitir aquella dimisión. Leyéronse varios documentos relativos al asunto, y eran tan convincentes y tan concluyentes, que las afecciones personales y los sentimientos que inspiran la amistad larga e íntima o el compañerismo de los campos de batalla empujaron para dar lugar a la unánime manifestación de asentimiento a la conducta del joven príncipe, cuya prudencia y cuyo tacto dejaron prendados a los que no le conocían, y confirmaron a los demás en el juicio ventajosísimo que tenían formado de las grandes cualidades del legítimo heredero del trono de España.

«En adelante, dijo el rey con noble entereza, yo me encargo de dirigir personalmente los asuntos de mi causa.»

Trabajo costó a cada uno de los concurrentes contener el entusiasmo que rebosaba en su pecho y apazarse siquiera por algunos momentos las calurosas aclamaciones. El general Elio, modelo de cabaleros, dechado de lealtad y consecuencia, tomó la palabra como decano de los militares allí presentes, para reiterar su adhesión a don Carlos y para protestar de que, como hace treinta y seis años, está hoy dispuesto a servir a la causa que él representa, y cuyos principios se resumen en el glorioso lema de Dios, Patria y Rey.

Casi sin concluir de hablar el general Elio levantáronse unánimemente como movidos por un resorte todos los concurrentes para hacer suya la manifestación de aquel ilustre defensor de la monarquía legítima, y para protestar de que así como muchos de ellos habían hecho un sacrificio acudiendo presurosos a aquella reunión desde las más remotas provincias de España, estaban dispuestos a hacer sacrificios mucho mayores por la religión, por la patria y por el rey que tan dignamente sostenía la bandera que la Providencia había puesto en sus manos.

Renunciábamos a describir a nuestros lectores aquella escena tierrísima, que es menester oír contar de viva voz a alguno de los que tuvieron la dicha de encontrarse en ella, y que más que para describirla es para sentirla.

Pero para sentirla, es menester sentir antes el entusiasmo que inspira la fe en los principios católicos y monárquicos; es menester participar de aquel santo amor a la patria, que enardece el corazón y le dispone al sacrificio hasta la abnegación de sí mismo; es menester tener profundamente arraigado el sentimiento de la monarquía, que hace ver en la persona del monarca al gran representante de la patria con todas sus glorias, con todas sus tradiciones; es menester abarcar con la inteligencia y con el corazón todos los sentimientos que espresaban nuestros padres al grito de ¡viva el rey!

¡Ah! Los partidos liberales en que las personas lo son todo y los principios nada no pueden comprender nuestro entusiasmo; esos partidos que se dejan guiar por el capricho de un general de cuya prepotencia hacen depender el triunfo de sus mezquinas ambiciones, no comprenden ni pueden comprender cómo los verdaderos partidarios de la monarquía, sin dejar de respetar a los

servidores ilustres de la misma, y sin dejar de apreciar sus méritos, sacrifican en determinados casos hasta sus afecciones personales para rendir el debido tributo a los principios y por ellos al monarca que los representa.

La reunión de La Tour ha sido un acontecimiento notable que ha demostrado la union y entereza del partido por lo cual debían regocijarse todos los hombres que profesan los principios católico-monárquicos.

Damos gracias a la Providencia que ha inspirado a D. Carlos en su conducta digna, enérgica y prudentísima hasta en las cosas más minuciosas: felicitamos a todos los representantes de la causa carlista que con su adhesión unánime a las resoluciones del rey acaban de hacer un gran servicio a la patria, y esforcémonos todos en preparar a ésta para recoger en un día, no lejano, el fruto de paz y de prosperidad que ha de darle el triunfo de la monarquía tradicional representada en Carlos VII.

EL «MEMORANDUM» DEL GOBIERNO FRANCÉS.

La *Epoca* trae el extracto del *Memorandum* que el embajador francés en Roma ha entregado a Su Santidad de parte del Gobierno imperial.

Este *Memorandum*, si está concebido en los términos en que la *Epoca* nos lo comunica, da bien desdichada muestra del sentido político del Gobierno francés y de su inteligencia en las materias que son objeto de aquel escrito. No parece sino que el tal documento es obra de un Sgasta un poco más ilustrado, esto es, un poco más comedido y culto en las formas que el nuestro.

Es seguro que habrá producido en el Gobierno de la Santa Sede un profundo sentimiento de lástima la lectura del *Memorandum*. «Es posible, se habrán dicho aquellos sabios varones que rodean al Padre Santo, es posible que quepan tanta ceguera y tanta ignorancia en hombres que se tienen por entendidos, por eminentes quizá en la ciencia social y política?»

En verdad que parece imposible.

Graves motivos, se dice en aquel documento, que han impulsado al Gobierno del emperador a salir de la reserva que se había impuesto respecto del Concilio. Protesta de su respeto a la libertad de la Iglesia, y reconoce la incompetencia de los poderes civiles en las cuestiones religiosas, lo cual no impide para que luego, con la excusa de intervenir solo moralmente y solo en las cosas que son «de la incontestable competencia de los poderes temporales», y con el pretexto de «que el límite de las potestades civiles ha sido traspasado por la eclesiástica», pida que se retire el *Schema de Ecclesia*, si es auténtico el texto publicado por algunos periódicos extranjeros, todo lo que produciría las más graves consecuencias en el orden legal y en el orden social de todos los Estados de Europa.

Es donde que se hable de graves consecuencias en el orden legal y social de los Estados de Europa por los principios consignados en el *Schema de Ecclesia*. Se necesita verdadera audacia para acusar de perturbadora a la Iglesia en estos tiempos precisamente en que el orden legal y social no existía en ninguna parte, por haberse separado los Gobiernos de los principios católicos, que son los que ordenan y salvan a las sociedades.

El *Memorandum* añade que en el *Schema* se trata de subordinar la sociedad civil a la sociedad eclesiástica, y que tiene por fin y objeto restablecer en el mundo entero el ascendiente de las doctrinas que someten la sociedad civil al imperio del Clero, de donde deduce que los Gobiernos temporales no conservarían mas poder ni más libertad que las que la Iglesia les quiera dejar.

¿Qué obcecación! ¿Qué singular modo de confundir las ideas! Aun concediendo que se trata de subordinar la sociedad civil a la religiosa, lo cual no es ningún daño porque en el orden moral es una ley cumplida, su excepción, por todos los pueblos del mundo en todos los tiempos el someter lo civil a lo religioso, lo político a lo moral, lo que atañe a la materia a lo que atañe al espíritu, cómo puede decirse que eso significa el imperio del Clero sobre los Gobiernos temporales? Que el poder civil no intervenga en la enseñanza, en la propiedad, en la familia, en el orden social, sino ajustándose a las doctrinas de la Iglesia que garantizan aquellos preciosos objetos salvándolos de la corrupción, de la rapina y de las conspiraciones de los malos, ¿quiere decir que el Clero ha de ejercer imperio alguno sobre los Gobiernos temporales? ¿Quiere decir que no ha de haber más que ministros Prelados y gobernadores Canónigos y alcaides Curas? ¿Quién no ve que se trata de que el poder civil se inspire en las sanas doctrinas del Catolicismo, y en vez de arrojar a Dios del Estado proclame altamente que Dios Redentor es el único camino por donde se va a la ventura y prosperidad de los hombres y de las naciones, y no se trata por ningún concepto de que se ponga en manos del Clero el gobierno de los Estados?

Tales temores si son sinceros, prueban una ignorancia supina; si son arteros prueban una maldad despreciable.

Pero en ese *Memorandum* hay, a más de eso, contradicciones de una magnitud increíble. Se empieza por decir que se producirían graves consecuencias en el orden legal y social de Europa, si se proclamasen por el Concilio las doctrinas del *Schema de Ecclesia*, y se concluye por manifestar lo siguiente:

«En el estado actual de las sociedades la declaración de esos principios no podría producir tan graves resultados. La independencia de la sociedad civil, que en otras épocas pudo creerse amenazada, está hoy, de derecho lo mismo que de hecho, más alta que toda controversia y que todo ataque. La libertad de conciencia y la libertad de cultos, universalmente reconocidas, hacen imposible hasta la hipótesis de que la sociedad religiosa se dimita sobre la política. No tenemos ese peligro. Hasta los que con más ardor excitan al Concilio a que convenga a sus ideas en dogma, reconocen que las necesidades del tiempo presente condenarían a tales decretos a quedar en el estado de letra muerta.»

Pues si han de quedar esos decretos en el estado de letra muerta, ¿para qué se habla de graves consecuencias en el orden legal y

social de Europa? ¿Para qué escribir esos soporíferos *Memorandum* donde se manifiesta la absoluta ignorancia en materias religiosas, sociales y políticas de G. biernos que se precian de ilustrados, y quizá de los más ilustrados del mundo?

Si no teméis el peligro de que la sociedad religiosa domine sobre la política, ¿ad que la Iglesia defina y consigne los principios de verdad y justicia que crea convenientes. Si sus decretos han de ser letra muerta, no escribáis vosotros letras tan vivas contra las muertas.

¿Pero qué mejor demostración de la poderosa vitalidad de la Iglesia que estos tristes ataques de sus enemigos! Ellos, como el pueblo hebreo, son un testimonio irrecusable de la misma verdad que niegan.

En la sesión de anoche terminó nuestro amigo el Sr. Ochoa su interrumpido discurso contra la autorización que pide el Gobierno para plantear como leyes los proyectos de Gracia y Justicia. El más grave de estos proyectos es el de matrimonio civil, y a él dirigió sus ataques el Sr. Ochoa, pronunciando un rotundo, elocuente y razonado discurso protesta en nombre de los diputados católicos.

En la última comunicación dirigida a las Cortes por el señor Obispo de Osma, decía este venerable Prelado que lo único que compete a la Cámara en materias canónicas, es declarar su incompetencia y no tomar resolución alguna. Siguiendo el mismo criterio, el Sr. Ochoa protestó anoche contra el proyecto de matrimonio civil, diciendo que los diputados católicos no le darian ni su voto negativo, por no reconocer en las Cortes de ninguna manera facultad para legislar sobre el matrimonio.

Pero el Sr. Ochoa, no contento con esto, hizo profundas y atinadas reflexiones sobre el proyecto que se quiere plantear, demostrando que es contrario a las leyes de la Iglesia, perturbador de la sociedad, dañoso en alto grado a la familia, corruptor del matrimonio verdadero y germen de escándalo e inmoralidad.

Mucho hemos hablado ya de este asunto; pero hay cosas, como indicaba el Sr. Ochoa, que nunca serán bastante combatidas. Abrigamos la esperanza fundada de que en la católica España no serán muchos los que se contenten con firmar un contrato ante el alcalde para considerarse marido y mujer; pero a más de que es un grave mal y un escandaloso ejemplo que haya algunos concubinos autorizados por la ley, es preciso dar la voz de alerta a la mujer para que no se deje engañar, pues el proyecto del ministro de Gracia y Justicia, como decía muy bien el Sr. Ochoa, abre la puerta a la poligamia.

El matrimonio civil, es decir, la mancha legal, no es impedimento dirimente para el sacramento, y podrá suceder que alguna infeliz creyéndose casada por el alcalde y el escribano, se encuentre abandonada, y vea unido a otra mujer al hombre a quien había considerado como esposo. En Tortosa, si no estamos equivocados, ha ocurrido ya un caso de estos, y no será el único si se plantean los proyectos del ministro de Gracia y Justicia.

Pero no es esto solo el proyecto de matrimonio civil es tan perturbador y tan absurdo, que desconoce el matrimonio sacramental; no le prohíbe, porque no puede prohibir, mas no considera casados a los que se casan como Dios manda, conforme a Sacramento, hasta que no hayan celebrado el matrimonio civil. De manera que la potestad eclesiástica queda anulada en un país católico, y el matrimonio sagrado no surte por sí efectos legales. Se concede protección y amparo, y se dan derechos al concubinato, a la mancha, y se niegan al Sacramento, al matrimonio. Esto, en otra forma, es repetir lo que hizo la revolución francesa, despreciar y escarnecer a la Virgen y ensalzar y coronar a la prostituta. Preciso es convenir en que tan odiosa conducta es la que corresponde a la revolución que destruye los santuarios y destierra de sus moradas a santas mujeres, mientras concede la más amplia licencia a la blasfemia y a la livandad desenfrenada.

El Sr. Ochoa en su largo y bien meditado discurso, tocó una porción de puntos ya relativos al matrimonio en general, ya conforme al proyecto del ministro, haciendo importantes consideraciones, en que no podemos seguirle. En el lugar correspondiente hallarán nuestros lectores este discurso, uno de los mejores que ha pronunciado el Sr. Ochoa, y que le valió las felicitaciones de hombres de todos los partidos.

El asunto era interesante, porque si la revolución en su desatentada carrera todo lo trastorna, el proyecto de matrimonio civil ha de producir necesariamente gravísimos males y hondos perturbaciones en la sociedad española. Será el principio de la disolución social, porque ataca la base angular de los pueblos; la familia. Por más que nuestros revolucionarios quieren hacer indisoluble el matrimonio civil, no lo lograrán, porque es absurdo. Lo que es hijo del convenio, el convenio lo destruye, y no es bastante la sanción humana a dar carácter de perpetuidad a lo que hasta en los pueblos salvajes tiene y ha tenido siempre para ser considerado indisoluble, la intervención del principio religioso.

El hombre no comprende que un contrato le ligue para siempre: el matrimonio civil es un contrato, y las leyes no pueden alterar la naturaleza de las cosas. En ninguna parte es indisoluble el matrimonio puramente civil; y el Estado, por más que lo pretenda, no ha de convertirse en Sacerdote, y menos en Dios, para darle la perpetuidad. Adoren nuestros revolucionarios al Estado; no por eso su intervención producirá los efectos de la intervención divina. La *estoloidad* que se profesa en nombre de la libertad es una irracional y tan vergonzosa, una doctrina tan irracional y tan degradante para la dignidad humana, como el brutal paganismo de los pueblos idolátricos.

A esto nos conduce el progreso de los tiempos y la civilización moderna.

A *El País* y a otros periódicos liberales les molesta mucho que afirmemos un día y otro la imposibilidad de que haya excisio-

nes en nuestro partido, y aseguremos que todo lo que ha sucedido hasta hoy no ha hecho sino aumentar más y más la íntima unión que existe entre los hombres agrupados en torno de la gloriosa bandera española que, por la inquebrantable perseverancia de nuestros antepasados, ondeó triunfante en las almenas de Granada.

El País añade: Y pensarán tales periódicos neo-católicos que sus afirmaciones son creídas!

No lo serán por quien tenga interés en negarles; pero quien tenga ojos en la cara verá que todos los periódicos carlistas de provincia y todas las juntas de España, movidas por un mismo sentimiento, han mostrado y siguen mostrando su entusiasta adhesión al Rey y a los salvadores principios que simboliza.

Comprendemos que este hecho, descorrido en la historia del liberalismo, sea la desesperación de nuestros ingobernables adversarios.

El Imparcial dice que los montpensieristas, convencidos de que en las Cortes no podría obtener su candidato arriba de 50 votos, están calculando cuántos se encontrarían por medio de un plebiscito pagándoles a 20 reales. Hay quien supone, añade, que podrían conseguir tres millones de votos.

Mucho temeríamos por la suerte de los progresistas y de los cimbrinos, como partidos políticos, el día en que los unionistas les salieran al encuentro con tres millones de votos.

Si Mendizábal hubiera tenido a su disposición igual cantidad, seguramente no hubiera necesitado echar mano de la desamortización para crear partidarios de las ideas liberales.

Según El Imparcial, los unionistas calculan que para San Isidro se fijará lo que llaman la primera paralela contra el general Prim.

Según La Epoca, han salido para Portugal cuantos bultos de la propiedad de un importante personaje.

Pues señor, el diluvio está encima, ¡preparense al arca.

Los periódicos moderados anunciaron días pasados con gran algarazara a sus lectores, que Lord Derby había dado un banquete en Roma, en el cual se brindó por el pronto advenimiento de D. Alfonso al trono de España.

No hay semejanza cosa; el que ha dado el banquete a que se referían los diarios moderados no es lord Derby, ministro que ha sido de Negocios extranjeros en Inglaterra, sino el jefe del partido thory que falleció poco há, sino lord Denbigh, miembro de la Cámara de los Pares, personaje muy respetable, pero de poca o ninguna influencia en la política del Gabinete de San James. Su opinión por lo tanto podrá ser muy satisfactoria para los moderados, pero no equivale en manera alguna al valor que podría tener la opinión de lord Derby en favor del príncipe Alfonso.

Sentimos que esta rectificación coincida con haber declarado La Epoca que no considera solución definitiva el advenimiento de ese príncipe al trono de España, porque al fin y al cabo son dos disgustos en dos días consecutivos para los moderados.

Como verán nuestros lectores en el lugar correspondiente, las juntas carlistas de provincia y de distrito se apresuran a adherirse al telegrama que la Junta central, los diputados y la prensa carlista, remitieron al duque de Madrid después de la reunión de La Tour.

Los periódicos de provincias, por su parte, se adhieren también a la manifestación colectiva hecha por los diarios carlistas de esta capital.

Pero no solo de España recibe el augusto príncipe D. Carlos nuevos testimonios de adhesión a su causa o felicitaciones por esas mismas adhesiones.

Varios príncipes parientes de D. Carlos le han felicitado, y entre ellos el señor duque de Módena, tío carnal del duque de Madrid.

Nosotros supimos ayer esta noticia, que confirmó La Esperanza, añadiendo que el primero de dichos príncipes ha hecho al segundo una gran promesa que no ha de tardar en convertirse en magnífica realidad.

El Telégrafo autógrafo de París hace una sucinta reseña de la importantísima reunión celebrada en La Tour, bajo la presidencia de D. Carlos VII.

En esa reseña, de cuyos hechos ciertos damos cuenta en nuestro artículo de fondo. Se cometen algunas inexactitudes, como son que no hayan asistido más que setenta y siete personas, cuando el número de estas ha pasado de ciento cuarenta, habiendo llegado algunas tarde; y que no se permitiera hablar a nadie, cuando es notorio que el ilustre general Elio tomó la palabra, interrumpida por las entusiastas aclamaciones de los concurrentes. Tampoco es cierto que haya diferencia alguna de opiniones entre los carlistas antiguos y los nuevos.

El Imparcial declara que es cierto que el ministerio de Fomento se ha suscrito a la revista titulada Ilustración de Madrid por 425 ejemplares. Pero añade que la empresa de El Imparcial encargada de la dirección y la parte de imprenta (pues no es nada!) de aquella revista sólo ha podido obtener tres acciones de las veinte en que está dividida la empresa de la misma; y dirigiéndose a El Pensamiento, dice:

«De manera, caro colega, que El Imparcial se ha vendido al Gobierno por mucho menos de lo que Vd. supone, por 150 rs. al mes.»

Pues aun así es caro.

Comiamos de El Legitimista las siguientes líneas:

«Según noticias que acabamos de recibir han sido nombrados secretarios del duque de Madrid los generales Elio y Martínez Tenaquero con el

conde Samitier. Solo estos nombres constituyen una sólida garantía para nuestro partido, hoy como siempre dispuesto y entusiasta por el triunfo de su legítimo rey, hoy como siempre unido y compacto en torno a la bandera augusta que simboliza el derecho y las gloriosas tradiciones de la nación española.»

La real Academia de la Historia ha elegido por unanimidad académico correspondiente, a nuestro ilustrado y laborioso amigo D. Juan Catalina García, presidente de la Juventud católica de Madrid.

Acertadísima ha sido la elección. El Sr. Catalina García une a su claro talento, ilustración poco común, mucha laboriosidad y decidida afición a los estudios históricos. Algunos de sus trabajos de esta índole le han valido ya premios y distinciones, y le valen hoy el honor con que favorece la real Academia de la Historia.

Felicitemos a nuestro joven amigo y a la Juventud católica, en cuya honra reuñda la distinción hecha a su presidente.

La Iberia dice lo siguiente: «El general Elio, que gozaba de tanta influencia entre las huestes guerreras de D. Carlos, ha tenido a bien imitar el ejemplo de Cabrera, y se retira a gozar de las delicias del campo.»

La Iberia falta a la verdad.

Según noticias recibidas de Villavieja de Odon, las tentativas de los protestantes para pervertir a aquel pueblo han sido del todo infructuosas, a lo cual han contribuido muy particularmente los sermones del señor Cura párroco durante la Semana Santa y la ayuda de la Asociación de Católicos que remitió a Villavieja sa centenas de libritos entre ellos «ociosos catecismos del Emmo. Cardenal Cuesta. Los traficantes del protestantismo se convencieron al cabo de que en esta noble tierra no echa raíces la semilla de la impiedad y del error.

Escriben a La Esperanza sus amigos de Bilbao que llega ya a mil quinientos el número de socios inscritos en el casino católico monárquico de aquella población, donde cada día era mayor el entusiasmo del partido, el cual crecía inmensamente, no obstante las contrariedades sufridas, que pintan a su manera nuestros enemigos, y con las que solo consiguen el efecto contrario de lo que buscan. Damos la enhorabuena a nuestros hermanos por su ardiente entusiasmo, y pueden estar completamente seguros de que nuestros correligionarios de todas partes se hallan animados del mismo espíritu, que es el demostrado siempre por el partido carlista, su ceda lo que suceda. Para nosotros no hay más que Dios, Patria y Rey.

La Esperanza hace las siguientes preguntas: «Nos podrán decir los que lo sepan, por qué se retiró ayer mañana el piquete de ingenieros que con su bandera concurrió a la parroquia de San Ginés para acompañar al santo Viático que para los enfermos de la misma salió procesionalmente, antes de que se pusiera en marcha la procesion?»

«Si tendrá que ver algo en ello la asistencia de dos compañías de voluntarios que al efecto se presentaron posteriormente con sus respectivas músicas? El caso fué que tan luego como estos aparecieron aquellos se retiraron. Esto será obra de armonía para el Sr. Rivero.»

Hiciese cargo La Política de lo dicho por El Imparcial y La Epoca sobre la dimisión del regente de su elevado cargo, y añade: «A pesar de cuanto en este sentido dicen los citados diarios y de lo bien informados que aparentan estar acerca de las intenciones del regente, llegando hasta designar el plazo fijado por S. A. para terminar las leyes orgánicas y proceder a la elección de rey, creemos que hablar de esto es lo mismo que hablar de la mar.

Es decir, esplanada esta idea por el diario unionista, «que tan posible es que sigamos dando tumbos a merced de las opuestas corrientes que impiden hacer rumbo a la nave de la revolución como que esta vaya a estrellarse en el Maelstrom de la dictadura. Todo depende de los vientos que soplen y de la habilidad de los pilotos que dirigen la combatida nave del Estado.»

De los vientos, cierto, pero respecto de la habilidad....

Por el ministerio de Hacienda se ha dispuesto que las administraciones económicas entreguen a los ayuntamientos que se hallen solventes en el pago de los cupos del impuesto personal tanto por los tres trimestres del año económico de 1868-69, como por los del actual ejercicio, los recargos de las contribuciones territorial e industrial, con sujeción a las órdenes especiales que se dicten.

Leemos en El Imparcial:

«Una ligera impertinencia al Sr. Echegaray:

«¿Es verdad, señor ministro, que V. E. es uno de los que subvencionan a El Imparcial?»

«Es verdad que por ese ministerio se pasan mensualmente 1.000 rs. al periódico del señor Gasset, titulado Ilustración de Madrid?»

«Y es verdad, ¿y esto es lo común que esa cantidad figura en la partida de agricultura y comercio?»

«Si esto pasase hace dos años se diría «cosas de Las Novedades»; pero si sucede hoy se diría «cosas de... hoy.»

Un diario anuncia que anoche fué sorprendido por los agentes de la autoridad un hombre que llevaba un enorme saco lleno de armas cubiertas cuidadosamente con paja. El citado sujeto se halla ya a disposición de los tribunales.

Leemos en El Pueblo:

«Siguen ocupándose los periódicos de las cuestiones de Cabrera y D. Carlos, perdiendo un tiempo precioso, que pudieran dedicar a más importantes asuntos.»

Eso probará al diario republicano que, a pesar de la multitud del cadáver, de los cuatro sacristanes y de los tiempos que pasaron para no volver los periódicos revolucionarios tan realmente a nuestra numerosísima comunión política la importancia que en sí tiene. Esta es la verdad.

Dice El Tiempo que a pesar de cuanto en contrario se ha dicho, parece que es cosa acordada la demolición del templo de Calatrava.

No nos maravillará.

Según un periódico moderado se ha pronunciado al fin el nombre del candidato del general Prim para ocupar el trono democrático; es el conde de Euz, aunque no responde de la certeza de esta noticia.

Un diario moderado publica la siguiente noticia de los meses que se adeuden al Clero de cuatro diócesis:

Zaragoza.

Al Clero, Abril, Mayo y Junio de 1869, y Julio, Agosto y Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre, Enero, Febrero y Marzo del presupuesto corriente.

En total, once meses.

Al culto, doce meses.

Al culto, ocho meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Huesca.

Al Clero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del presupuesto de 1869, y Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo del presupuesto corriente.

En total, nueve meses.

Al culto, ocho meses.

Pamplona.

Al Clero, Noviembre y Diciembre, Enero, Febrero y Marzo del presupuesto corriente.

En total, cinco meses.

Al culto, cinco meses.

Guadalajara.

Al Clero, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo del presupuesto corriente.

En total, nueve meses.

Al culto, nueve meses.

Nora. Terminado el mes actual, que fina dentro de cinco días, se aumenta el débito al Clero de estas diócesis en otro mes más.

Estamos seguros de que las demás diócesis estarán en situación parecida.

Según La Fraternidad, periódico de Sevilla, parece que de los dos millones venidos de Marruecos, se han mandado al ministerio de la guerra 80.000 duros en calidad de depósito. ¿Será esto cierto?

Dice un periódico que ha sido declarado cesante D. Pio Pi, catedrático de latín y castellano del instituto de Gerona, por haberse negado a prestar juramento a la Constitución del Estado.

Leemos en El Imparcial:

«Ayer se hablaba, no sabemos con qué fundamento, de la posibilidad de que se planteara en proyecto de ley hace tiempo presentado a las Cortes, referente a la dirección general de Contabilidad y Tribunal de Cuentas del reino.

Por dichas reformas obtendría mayores atribuciones la «expresada dirección, donde terminaría la revisión de las cuentas del Estado, quedando como tribunal de alzada el Tribunal de Cuentas, cuyo fallo sería definitivo.»

Además de las comunicaciones y despachos telegráficos que se reciben de las provincias, añadiéndose a la manifestación de la prensa carlista, El Tradicional, importantísimo periódico de Valencia, publica la siguiente declaración que sigue a la de la prensa de Madrid:

«El Tradicional, aunque el último de los periódicos de provincia, se adhirió con entusiasmo a la anterior declaración, y una vez más aclama a D. Carlos VII, único jefe del gran partido nacional legitimista.»

Otro periódico, no menos importante, La Concordia de Zaragoza, se expresa en estos términos:

«Nuestro triunfo es inevitable, y todas las arterias de nuestros enemigos solo servirán para hacerlo más glorioso.

«Viva la Religión! Viva la Patria! Viva el Rey! este es nuestro lema y con él triunfaremos.

«He aquí ahora el escrito publicado por nuestros compañeros de Madrid, y al cual La Concordia se adhiera por completo.»

Por último, otros periódicos muy notables como La Cruz de Sobrarbe, El Eco Setabense de Jativa y El Mediodía de Córdoba, únicos que tenían conocimiento de la manifestación de la prensa de Madrid, al adherirse a ella añaden testualmente «que renuevan, como la Junta Central, los señores diputados y prensa madrileña, sus sentimientos de adhesión al señor duque de Madrid.»

La prensa revolucionaria recibe por lo tanto, un nuevo desagravo cuando crea ver aparecer en nuestro campo los odios y excoisiones que le devoraban.

Esperábamos ayer hallar en El Imparcial la relación de lo ocurrido anteayer en la tertulia progresista; pero nada nos dijo sobre el particular, y solo en los periódicos de anoche vamos algunos pormenores de lo que pasó en aquel poderoso establecimiento político, como lo llama La Epoca. Parece que el Sr. Salmeron Alonso provocó declaraciones que no fueron hechas según dicho periódico por el general Prim, quien se limitó a decir que en el gobernarle del Estado tenía puesta, no una, sino las dos manos, que como el gigante de la fábula dormía con un ojo abierto, y que por lo tanto sus amigos podían echarse a dormir tranquilos.

La Correspondencia, por su parte, al tratar de esta reunión, dice lo que sigue:

«Aplazado así por pocos días el principal asunto objeto de la reunión (la formación de un gran comité nacional), expuso el general Prim que a pesar de su costumbre de decir siempre algo de política a sus amigos cuando visitaba la tertulia, en esta ocasión, cuando las distancias se estrechan y se acerca el período de las soluciones definitivas no podía ni debía hacer revelaciones, si bien esperaba que llegaría pronto el día en que pueda hablar con satisfacción y franqueza.

El Sr. Madoz entonces habló de las discusiones de los jueves, y especialmente de la de la semana anterior, en que se habló de la cuestión de incompatibilidades, idea que tenía en su apoyo la mayoría de la tertulia.

Este recuerdo dio lugar a algunas voces contrahictorias que revelaban que la disidencia respecto de este particular es tan grande como en la Cámara; pero con atinada oportunidad se puso término a esta discusión, diciendo el señor Madoz que esas pequeñas diferencias no impedirán que el partido liberal, en caso necesario, esté unido como un solo hombre contra la reacción y la demagogía.

Dice La Correspondencia que ayer se habló entre algunos diputados monárquico democráticos de un proyecto de reunión de gran número de ellos para ocuparse de la cuestión de rey, y ver si pueden llegar a un acuerdo aceptable. A esta reunión, según dicho periódico, asistirán casi todos los unionistas y muchos radicales, y se trata de que presida uno cuyas opiniones no sean muy marcadas en sentido determinado.

En otro lugar añade el diario noticiero que continúa con mayor incremento cada día la opinión de que en todo el mes de Mayo habrá grandes soluciones políticas, sin que nadie se atreva a afirmar en qué sentido, por más que la opinión de la Cámara determine ya claramente la tendencia a la monarquía definitiva.

La Epoca dice que dicha reunión debe celebrarse dentro de muy pocos días.

Según un diario noticiero, las bases del señor Moret para la reforma constitucional de Puerto Rico, establecen que la autoridad superior civil podrá enviar delegados a los puntos donde los crea necesarios, podrá prohibir toda publicación, discusión o enseñanza pública que tenga por objeto la esclavitud o el menoscabo de la integridad del territorio, entregando los acusados a los tribunales. La misma autoridad parece que tendrá facultades para nombrar ciertos empleados, para presidir y convocar las acciones municipales y provinciales en los casos en que los municipios o provincias falten al cumplimiento de sus obligaciones. Las diputaciones, por último, tie-

nen la facultad de acusar ante los tribunales ha los empleados que falten a su deber.

Leemos en La Correspondencia:

«Al inaugurarse ayer el casino carlista en Santiago, algunos grupos atropellaron a la música; pero la presencia de la guardia civil bastó para restablecer el orden. Por la noche volvieron a reunirse los grupos e hicieron algunos disparos de revolver y apedrearon las ventanas del edificio en que se había constituido aquel. El gobernador de la provincia salió inmediatamente para dicho punto; pero a su llegada todo había terminado sin otras consecuencias.»

Esta es la conducta de los libros por regla general; perseguir a los carlistas y atropellar sus derechos. Al menos por esta vez ha sido imparcial La Correspondencia.

El mismo periódico da cuenta de otro brutal atropello cometido contra carlistas pacíficos. En García, pueblo de Tarragona, parece que ha sido recibido a tiros D. Francisco Pedret, vecino y abogado de aquel pueblo, que ha presidido la reunión carlista de Mora de Ebro. Según noticias de dicho periódico, cuando iba con algunos amigos para asistir a la boda de una hija suya, fué acometido en el camino y tuvo que huir, saliendo herido su mayordomo y otros tres amigos.

«Puede negarse ya que la España con honra se va convirtiendo en país de cafres?»

Parece que anteayer se votó en Tarragona el comité directivo de los republicanos intransigentes, de cuyo acto protestaron los tres clubs de transigentes. Lo mismo ha sucedido en Reus, según dice un periódico.

Según dice un periódico, no es cierto que la comisión de presupuestos haya hecho dimisión, pero viene a ser lo mismo puesto que no se reune, y ni siquiera el articulado sobre la ley de gastos acaba de salir a flote. Entre tanto, añade, se discute todo lo discutible hasta La Tutelar, cuyos socios sabrán cuidar de sus intereses para dejar a un lado lo que afecta verdaderamente a la generalidad del país.

Ayer mañana llegó a Madrid el señor ministro de Fomento con algunas horas de retraso en el tren.

«Sus compañeros, dice anoche La Epoca, lo han obsequiado publicando en la Gaceta de hoy el nombramiento para un cargo que, por acuerdo de las Cortes, depende ya de su ministerio, pero estos son pequeños accidentes en medio de la gravedad de tantas otras cuestiones.»

Leemos en La Epoca:

«La comisión de ley electoral se halla en una situación como no ha tenido nunca comisión alguna. Desechado su artículo sobre incompatibilidades, debe inquirir el criterio que presidirá a dicho voto para formularle ante la Asamblea; pero esta tarea es difícil, considerando que anticipadamente habían sido desechadas también varias enmiendas en que se proponían diferentes escalas de compatibilidades. Por esta causa la comisión vacila, se ve estrechada por la opinión de su partido de fuera de las Cortes, y de aquí el rumor de que presurará el artículo redactado casi en los mismos términos que antes.

El Gobierno, sin embargo, desea una solución intermedia, y para hoy ha convocado a una conferencia a la comisión electoral: asegúrase que al cabo prevalecerá el sistema italiano, que señala un número fijo de empleados que pueden pertenecer a la Asamblea.»

O lo que es lo mismo, que seguirán las cosas en este punto como hasta aquí.

Dice un diario liberal, que el marasmo que reina en la Asamblea, a la sombra del cual se esparcen todo género de rumores más o menos inverosímiles, trasciende a las provincias, donde también hallan acogida los más increíbles temores. Un periódico del Ferrol habla de resacas de un próximo golpe para imponer rey a la nación.

También se ha dicho, añade, que por el ferrocarril de Badajoz habían salido para Portugal cuantos bultos de la propiedad de un importante personaje, y todo esto, que se aumenta, que se exagera, que se inventa quizá, sirve para difundir la alarma y hacer más intolerable la situación de las provincias.

Noticias tomadas de varios periódicos de anoche: «D. Ramon Topete será nombrado fiscal del almirantazgo, por pasar a ministro del tribunal del mismo almirantazgo el contralmirante Sr. La Rigada.

«Los profesores de las escuelas públicas de Madrid están firmando una exposición para las Cortes pidiendo que se les exima del pago del 10 por 100 sobre sus haberes.

«Ha sido admitida la dimisión que del cargo de juez de primera instancia de Vitoria tenía presentada D. José María Unceta y Urquijo.

«Hoy ha firmado el regente una plenipotencia en favor de nuestro embajador en París, autorizándole para que firme un convenio adicional al tratado de correos celebrado con aquel Gobierno.

«En la primera quincena del mes actual, la renta de algunas aduanas de la península ha sufrido baja en sus ingresos por efecto de los últimos acontecimientos.

«Créese que en el Consejo de mañana se tratarán algunos asuntos importantes.

«Hoy se ha despedido del señor ministro de la Guerra el brigadier Merelo, nombrado nuevamente comandante general del departamento oriental de Cuba, para cuyo destino sale mañana de Madrid.

«Con motivo de las muchas dudas a que han dado lugar las nuevas tarifas sobre la contribución industrial, parece que se piensa en nombrar una comisión de comerciantes para hacer las observaciones que crean justas y deshacer esas dudas que hoy existen en la mayor parte de las clases.»

Dice un diario noticiero que a mediados de mes presentará a las Cortes el señor ministro de Hacienda una Memoria sobre el estado de la Hacienda.

No necesita el país de Memorias para saber que el estado de la Hacienda española no puede ser más deplorable.

La Gaceta de hoy publica la ley, fecha 23 del corriente, sancionada por las Cortes, llamando al servicio de las armas 40.000 hombres para cubrir las bajas del ejército permanente en el año actual.

Ha sido nombrado comisario general de los Santos Lugares de Jerusalén, D. Vicente Rodríguez, diputado a Cortes.

CORREO DE HOY.

Dice un telegrama de Roma del 23:

«Todo está ya dispuesto para celebrar mañana en San Pedro la tercera sesión pública. La Sala conciliar ha quedado como estaba el día de la apertura del Concilio. La ceremonia empezará a las nueve de la mañana, cantando la Misa de Espíritu Santo el Cardenal Bilio, presidente de la comisión de Fide. Los Padres asistirán con capa encarnada. No habrá discurso. Después de la Misa los Padres votarán de viva voz, en presencia del Papa, los primeros actos conciliares. Su Santidad los promulgará solemnemente después de publicada la votación.»

La Agencia telegráfica española es tan amable, que todavía no nos ha dado noticia de esta tercera sesión que debió celebrarse anteayer.

Los Obispos napolitanos y sicilianos han escrito al señor Obispo de Strasburgo, adhiriéndose a su condenación de las cartas del P. Gratry.

Los periódicos franceses publican hoy el texto de la proclama de Napoleón con motivo del plebiscito. Hé aquí la traducción de este documento:

«FRANCOSES: La Constitución de 1852, redactada en virtud de los poderes que me habéis dado, y ratificada por los ocho millones de sufragios que han restablecido el imperio, ha dado a Francia 18 años de calma y de prosperidad que tampoco han estado exentos de gloria; ha asegurado el orden y ha dejado abierto el camino a todas las mejoras; a medida que la seguridad se ha afianzado se ha dado más expansión a la libertad.

«Pero sucesivos cambios han alterado las bases plebiscitarias que no podían ser modificadas sin mi llamamiento a la nación. Es, pues, indispensable que el nuevo pacto constitucional sea aprobado por el pueblo, como lo han sido ya las constituciones de la república y del imperio. En esas épocas se creía, como yo mismo creo hoy, que cuanto se hace sin vuestro concurso es ilegítimo.

«La Constitución de la Francia imperial y democrática reducida a un pequeño número de disposiciones fundamentales que no pueden ser cambiadas sin vuestro asentimiento, tendrá la ventaja de hacer definitivos los progresos llevados a cabo y de poner al abrigo de las fluctuaciones políticas los principios del Gobierno. El tiempo que con harta frecuencia se ha perdido en controversias estériles y apasionadas, podrá emplearse más útilmente procurando medios de acrecentar el bienestar moral y material de la nación.

«Me dirijo a vosotros todos los que desde el 10 de Diciembre de 1848 habéis superado todos los obstáculos para colocarme a vuestra cabeza, a vosotros que, desde hace veintidós años, no habéis cesado de engrandeceros con vuestros sufragios, sosteniéndome con vuestro concurso y recompensarme con vuestro afecto.

«Dadme una nueva prueba de confianza. Llevando al escrutinio un voto afirmativo, conjuréis las amenazas de la revolución, asentéis sobre sólidas bases el orden y la libertad, y haréis más fácil, para el porvenir, la transmisión de la corona a mi hijo.

«Haced diez y ocho años me conferisteis casi por unanimidad los más amplios poderes. Mostráis hoy tan compactos como entonces para adheriros a la transformación del régimen imperial. Una gran nación no debe esperar su desarrollo completo sin apoyarse en instituciones garantidas por la estabilidad y por el progreso.

«A la demanda que os he dirigido de ratificar las reformas liberales realizadas en estos últimos diez años; responded sí. En cuanto a mí, fiel a mi origen, me penetraré de vuestro pensamiento, me fortaleceré en vuestra voluntad; y confiando en la Providencia, no cesaré de trabajar sin tregua ni descanso en pro de la prosperidad y del engrandecimiento de Francia.—NAPOLEÓN.—Palacio de las Tullerías, 23 de Abril de 1870.»

El mismo día en que se votó definitivamente el Senado-consulta, que fija la Constitución de la Francia cumplió Napoleón III sesenta y dos años.

Leemos en La Concordia:

«Viva Carlos VII! Hemos recibido algunos periódicos carlistas de provincias adhiriéndose al manifiesto que de los de Madrid, e piamos en nuestro número del sábado. La dimisión del general Cabrera no ha desanimado a los carlistas, como esperaban los tonterales ¡Viva la religión! ¡Viva las libertades patrias! ¡Viva Carlos VII! Adelante, compañeros, adelante!»

El día 20 entraron en las cárceles del partido de Falset tres sujetos de García, presos a consecuencia de riñas ocurridas en dicho pueblo por cuestiones políticas, y de las que resultaron tres heridos de más o menos gravedad.

PARTE RELIGIOSA.

PARTE OFICIAL.

REGENCIA DEL REINO.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

LEY.

D. Francisco Serrano y Domínguez, regente del reino por la voluntad de las Cortes soberanas; á todos los que la presente vieren y entendieren, salud: Las Cortes Constituyentes de la nación española, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO.

Del estado de prevención y alarma.

CAPÍTULO PRIMERO.

Sección primera.

Artículo 1.º Las disposiciones de esta ley serán aplicadas únicamente cuando se haya promulgado la ley de suspensión de garantías á que se refiere el art. 21 de la Constitución, y dejarán de aplicarse cuando dicha suspensión haya sido levantada por las Cortes.

Art. 2.º Son objeto de esta ley:

1.º Las medidas gubernativas que las autoridades civiles y militares pueden y deben adoptar para mantener y restablecer el orden público, y para prevenir los delitos contra la Constitución del Estado, contra la seguridad interior y exterior del mismo, y contra el orden público, que la vigente ley penal condena.

2.º La competencia de los jueces y tribunales en las causas criminales que se formen sobre dichos delitos, y el procedimiento á que estas han de ajustarse.

Sección segunda.

Art. 3.º Publicada la ley de suspensión de garantías á que se refiere el art. 1.º, se considerará declarado por el mismo hecho el estado de prevención, hallándose facultada desde este momento la autoridad civil para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia concuerden convenientes á fin de asegurar el orden público.

Art. 4.º La autoridad civil excitará por oficio á la judicial para que proceda desde luego contra los que comprenda que son responsables en algún sentido de los delitos expresados en el artículo 2.º

Art. 5.º Si se formasen grupos, dictará las medidas oportunas para su disolución, intimando á los autores y auxiliares de la agitación que se disuelvan; y en el caso de no ser obedecida á la tercera intimación, utilizará la fuerza de que disponga, al efecto de restablecer la calma y dejar expedita la vía pública.

Art. 6.º Propondrá al Gobierno y en caso urgente acordará desde luego la suspensión de las publicaciones que preparen, existiendo ó auxilien la comisión de los delitos de que habla el art. 2.º de esta ley, y señaladamente los comprendidos en los artículos 167 y 174 del Código penal, dando cuenta al Gobierno de las determinaciones que sobre este punto adopte. Recogerá los ejemplares que encontrare de aquellas publicaciones, remitiéndolos con las personas responsables de los delitos expresados al juzgado ordinario competente para los efectos de justicia.

Art. 7.º La autoridad civil, en este estado, podrá detener ó detendrá á cualquiera persona, si lo considerase necesario para la conservación del orden.

Los detenidos en esta forma no deberán confundirse con los presos y detenidos por delitos comunes.

Art. 8.º Podrá asimismo compeler á mudar de residencia ó domicilio á las personas que considere peligrosas, ó contra las que existan racionales sospechas de participación en dichos delitos.

El cambio de domicilio no podrá decretarse á más de 150 kilómetros de distancia del pueblo del compellido á mudarle.

Art. 9.º El destierro que desde luego puede acordar la autoridad á una distancia que no exceda de 250 kilómetros, así como el cambio de domicilio, terminado que haya el período de suspensión temporal de las garantías constitucionales, si antes no fuesen estas restablecidas.

Los motivos de las providencias á que se contraen este y los tres anteriores artículos, se harán constar en acta que se levanta, é expediente que se forme antes ó después de llevarlas á ejecución.

Art. 10. La autoridad civil podrá también entrar en el domicilio de cualquier español ó extranjero residente en España sin su consentimiento, y examinar sus papeles y efectos. Pero nada de esto podrá verificarse sino por la misma autoridad ó por un delegado suyo, provisto de

orden formal y escrita. En uno y otro caso el reconocimiento de la casa, papeles y efectos tendrá siempre que ser presenciado por el dueño ó encargado de la misma, ó uno ó más individuos de su familia, y por dos vecinos de la propia casa ó de las inmediatas, si se hallasen en ellas, y en defecto por dos vecinos del mismo pueblo.

No hallando en ella al dueño ó encargado de la casa ni á ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento á presencia únicamente de los dos vecinos indicados, levantándose acta del reconocimiento, que firmará con ellos la autoridad ó su delegado.

Cuando un delincuente contra el orden público fuere sorprendido infraganti, y perseguido por la autoridad civil ó sus subordinados ó dependientes se refugiare en su propio domicilio ó en el ajeno, podrán estos penetrar en él; pero sólo para el efecto de la aprehensión.

Art. 11. Los deberes y atribuciones de la autoridad en el estado de agitación, alarma, desorden ó tumulto se subordinarán á lo que prescriben esta ley y el art. 131 del Código penal.

Art. 12. Si la autoridad civil, una vez empleados todos los medios de que en circunstancias ordinarias dispone, y los que para las extraordinarias le otorgan los precedentes artículos, no pudiese por sí sola, ni auxiliada por la judicial, dominar la agitación y restablecer el orden, lo prevendrá en un bando, que se publicará con la solemnidad posible, é inmediatamente después dispondrá que la militar proceda á la adopción de las medidas que reclama la paz pública, previa la declaración del estado de guerra.

Art. 13. Cuando la rebelión ó sedición se manifieste desde los primeros momentos, rompiendo el fuego los rebeldes ó sediciosos, ó comprenda la autoridad civil la urgente necesidad de apelar á la fuerza ó resignar el mando para dominarlos, se pondrá de acuerdo con la autoridad judicial y la militar, y dispondrá la inmediata declaración del estado de guerra.

Si no hubiese acuerdo entre estas autoridades, ni tiempo para tomarlo, se entrará desde luego provisionalmente en el estado de guerra en los dos primeros casos del párrafo anterior, dando directamente cuenta de todo al Gobierno y á las autoridades superiores gerárquicas respectivamente.

Art. 14. Si ocurriese la rebelión ó sedición en capital de provincia, la autoridad civil, para los efectos del artículo anterior, lo será el gobernador de la misma ó el que haga sus veces, y las autoridades judicial y militar las superiores en el orden gerárquico. En los demás pueblos se reunirá para dicha declaración el juez de primera instancia ó el decano si hubiere más de uno, el alcalde popular y el jefe militar que ejerza el mando de las armas.

En el caso de que en dichos pueblos no existiere autoridad militar que ejerza el mando de las armas, el alcalde popular, jefe superior de la milicia, asumirá las facultades que corresponden según esta ley á la autoridad militar en el estado de guerra.

Art. 15. En la capital de la monarquía y puntos donde residan el rey ó la regencia del reino no podrá declararse el estado de guerra sin autorización del Gobierno.

El Gobierno, cuando hayan ocurrido actos de rebelión ó sedición en dos ó más provincias ó si hayan presentado grupos considerables de rebeldes ó sediciosos armados en ellas, determinará el territorio que queda sujeto al estado de guerra.

CAPÍTULO II.

Art. 16. Recibida por la autoridad judicial la comunicación á que se refiere el art. 4.º de esta ley, ó sin recibirla, si tuviere conocimiento de los sucesos antes de que llegue á su poder, el juez ó jueces de primera instancia de la población donde ocurran aquellos, dando cuenta al regente de la Audiencia, se constituirán en sus juzgados, acompañados de los promotores fiscales respectivos y del escribano que designen, aunque no esté en turno, pudiendo valerse de él ó de otro durante el procedimiento si creyeran que lo exige así la administración de justicia.

Art. 17. Inmediatamente formarán los jueces la correspondiente causa sobre delitos contra el orden público y los de rebelión y sedición si hubiere méritos para ello, dedicándose exclusivamente á este servicio preferente; á cuyo fin, si lo creyeran necesario, delegarán la jurisdicción para los demás negocios en el juez de paz que correspondiere.

Art. 18. Darán aviso sin pérdida de tiempo á la autoridad civil de hallarse constituidos en tribunal, ofreciéndole su cooperación, y de estar formando causa sobre los sucesos que hayan producido la alarma ó el desorden, reclamándole los datos que crean convenientes para la pronta averiguación de los hechos criminales que sean objeto del procedimiento.

Art. 19. Si los delitos contra el orden público ocurriesen en punto donde exista Audiencia territorial, se constituirá en sesión permanente la sala de gobierno en el punto que el regente designe, adoptando los acuerdos oportunos para la pronta sustanciación de las causas.

En otro caso los regentes dictarán á los jueces que conozcan de estas causas las órdenes conducentes al propio fin, dando cuenta á la sala de gobierno para la aprobación ó reforma de dichas órdenes. A este propósito, la referida sala se reunirá diariamente, mientras lo considere necesario, á las horas que el regente le señale.

TÍTULO II.

Del estado de guerra.

Art. 20. Resignado el mando por la autoridad civil en la militar, y en los casos á que se contrae el art. 13 de esta ley, quedará declarado en estado de guerra el territorio de la provincia en que ocurran aquellos sucesos, lo que se hará saber al público por medio de bandos y edictos que contengan las prevenciones y medidas oportunas.

Art. 21. En dicho bando se intimará á los rebeldes ó sediciosos y perturbadores que depongan toda actitud hostil, y presten obediencia á la autoridad legítima.

Los que lo hicieren en el término que el bando fije, y no hubieren término señalado en el de dos horas, quedarán exentos de pena, excepto los autores ó jefes de la rebelión, sedición ó desorden, y los reincidentes en estos delitos.

Los autores y jefes referidos serán indultados de la pena que les correspondiera, caso de reunirse dentro del término que expresa el párrafo anterior, y sufrirá la inmediata inferior en su grado mínimo al medio. Los reincidentes quedarán sujetos á la vigilancia de la autoridad por el hecho de serlo.

Art. 22. Publicado el bando y terminado el plazo que en él se señala, serán desde los á todos trances los grupos que se hubieren formado, empleando la fuerza, si fuere necesario, hasta reducirlos á la obediencia, prendiendo á los que no se entreguen, y poniéndolos á disposición de la autoridad judicial cuando deban ser juzgados por ella, en la forma que se expresa en el tit. IV de esta ley.

Art. 23. Los que se consideraren como presuntos reos los que se consideraren ó hubieran estado en los sitios del combate durante el día, sin perjuicio de probar su inculpabilidad, hallándose en el mismo caso los que sean aprehendidos huyendo ó escondidos, después de haber estado con los rebeldes ó sediciosos.

Los habitantes de las casas en que se hubiesen hecho fuertes los rebeldes ó sediciosos no serán considerados presuntos criminales por el solo hecho de encontrarse en ellas. Pero si resultase haber tenido participación en los delitos á que se refiere esta ley, sufrirán la pena correspondiente.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo segundo de este artículo los individuos de las asociaciones filantrópicas legalmente establecidas para el socorro de los heridos en casos de guerra.

Art. 24. Los delitos de rebelión y sedición y los cometidos con ocasión de ellas serán castigados respectivamente, según lo dispuesto en el Código penal y en la forma determinada en el art. 184.

Art. 25. Todo funcionario ó corporación, cualquiera que sea su autoridad ó cargo, prestará inmediatamente, así á la autoridad militar como á la civil, el auxilio que estas le pidan para sofocar la rebelión ó sedición y restablecer el orden.

El funcionario ó corporación que no prestase inmediato auxilio á la autoridad superior militar ó civil será en el acto suspendido de su empleo ó cargo, y reemplazado en él interinamente hasta la resolución del Gobierno, á quien se dará cuenta al efecto; todo sin perjuicio de las penas en que incurra por consecuencia del procedimiento que se instruya para depurar su responsabilidad ó irresponsabilidad criminal.

Art. 26. Las autoridades civiles continuarán funcionando en todos los asuntos propios de sus atribuciones que no se refieren al orden público, limitándose en cuanto á este á las facultades que la militar les delegare ó deje expeditas; debiendo en uno y otro caso darla directamente las partes y noticias que los reclama, y las demás que con referencia al orden público lleguen á su conocimiento.

Art. 27. La autoridad militar, á la vez que adopte las medidas comprendidas en los artículos precedentes y que restablezca el orden y el prestigio de la autoridad á todo trance, dispondrá que inmediatamente se instruyan las causas á que haya lugar, y se formen los consejos de guerra que han de fallar las que correspondan á la jurisdicción militar, según lo que expresan los artículos siguientes.

Art. 28. Los consejos de guerra ordinarios fallarán las causas en que, siendo la rebelión de carácter militar, aparecieran reos de estos delitos ó sus auxilios militares de mar y tierra, en activo servicio, cualquiera que sea su situación y categoría.

Las causas á que se refiere el párrafo anterior se considerarán de carácter militar cuando los rebeldes ó sediciosos estén mandados por jefes militares, y cuando el movimiento se inicie ó sostenga por fuerzas armadas del ejército ó de la milicia popular.

Art. 29. También quedan sujetos á la jurisdicción de los consejos de guerra ordinarios, con arreglo á ordenanza, los jefes, los oficiales de la milicia popular armada ó los que en su defecto y de cualquier modo hagan veces de tales, y los rebeldes ó sediciosos que en número mayor de 12 individuos se levanten en armas ó sostengan con ellas la bandera de la rebelión y sedición en el bando, si fueran aprehendidos por fuerzas públicas, sean ó no del ejército permanente, destinadas á su preservación, ya por las autoridades militares, ya por las civiles.

Los jefes principales de una rebelión ó sedición armada de carácter no militar, durante el período de guerra, quedan también sujetos al consejo de guerra ordinario.

Art. 30. Todos los demás voluntarios populares armados, y los que sin pertenecer á la milicia popular tomen parte con armas y en población en una rebelión ó sedición, sean estas ó no de carácter militar, si hicieran resistencia á las fuerzas públicas, serán juzgados y sentenciados también por el consejo de guerra ordinario, si pudiendo en el procedimiento los trámites que señalan las ordenanzas militares y disposiciones especiales que le determinan.

El consejo de guerra se compondrá de cuatro capitanes nombrados por la autoridad militar, el juez de primera instancia, el de paz y el promotor fiscal más antiguo en el pueblo cabeza de partido judicial donde el consejo se celebre, ó que en haga sus veces.

Si el juez de paz no fuere letrado, lo reemplazará, según el número de orden, el suplente que lo sea; si no lo hubiere, asistirá al consejo el juez de paz ó suplente letrado del año ó años anteriores; y si no hubiere tampoco, el abogado más antiguo del pueblo donde se celebre.

Será presidente del consejo el vocal que segun las leyes civiles y militares fuere de mayor categoría. Y si sobre esto ocurriera duda, el que disfrutase más sueldo por razón de su empleo. Disfrutando sueldo igual, el más antiguo en el empleo que le devengue.

Los procesados podrán hacer la defensa por medio de señores oficiales, ó letrados en ejercicio que nombre, no pudiendo limitar su facultad de nombrar defensor á solo oficiales del ejército.

Art. 31. Todos los demás que se consideren responsables en cualquier concepto de los expresados delitos de rebelión y sedición serán juzgados y sentenciados por la jurisdicción común y conforme al procedimiento á que por esta ley ha de ajustarse.

En su consecuencia, si instruidas las diligencias sumarias por mandato de la autoridad militar apareciesen complicados como reos de los expresados delitos personas no comprendidas en los tres precedentes artículos, los fiscales de las causas harán expirar inmediatamente los oportunos testimonios del tanto de culpa, y los remitirán al juez de primera instancia que correspondiere por conducto de la autoridad militar superior, la que con toda seguridad pondrá los presuntos reos á disposición de dicho juez de primera instancia para los efectos de justicia.

Art. 32. La autoridad militar en el estado de guerra podrá adoptar las mismas medidas que la civil, y las demás á que esta ley la autoriza. Cuándo muy especialmente de que los jefes ó comandantes de las fuerzas que conduzcan presos, ya á disposición de su autoridad, ya á la de la civil ó judicial, lo verifiquen con toda seguridad al punto de su destino; y cuando no llegaren á él, mandará que se forme la causa oportuna para averiguar y castigar las faltas y delitos que en este delicado servicio se cometan, cualquiera que sea la clase del jefe que lo desempeñe.

Art. 33. Para declarar levantado el estado de guerra, luego que hayan terminado la rebelión ó la sedición, se celebrará previamente un consejo por las autoridades militar, civil y judicial de la capital de la provincia declarada en dicho estado de guerra; y si hubiere unanimidad de votos, se llevará á cabo el acuerdo, dándose inmediatamente cuenta al Gobierno.

Si el acuerdo no fuese por unanimidad, sino por mayoría de votos, no se llevará á cabo ínterin el Gobierno, á quien se dará asimismo cuenta con urgencia no resuelva lo que correspondiere al Consejo de ministros.

Sólo al Gobierno correspondió levantar el estado de guerra cuando haya hecho la declaración en los casos que determina el art. 15.

Art. 34. Las autoridades civiles y militares, serán remitidas á los juzgados competentes, para su continuación y demás efectos de justicia, todas las causas contra aquellas personas que se hallen sometidas al tribunal excepcional por virtud de esta ley.

TÍTULO III.

CAPÍTULO PRIMERO.

De los bandos que dicten las autoridades y de sus infracciones.

Sección primera.

Art. 35. Las autoridades civiles y militares, en el período de suspensión de garantías, publicarán además los bandos que consideren necesarios para mantener mejor el orden público, con sujeción estricta, y bajo su responsabilidad, á las prescripciones constitucionales que no hayan sido suspendidas con arreglo al art. 31 de la Constitución; estableciendo en dichos bandos las penas en que incurran los infractores, y las aplicarán gubernativamente.

Art. 36. En ningún caso podrán señalar mayores penas que las siguientes: multa hasta 125 pesetas ó arresto hasta ocho días, si dictare el bando un acaudalado popular.

Cuando sea el gobernador de la provincia quien le dictare, podrá elevar la multa á 250 pesetas, y el arresto hasta 15 días, á la par ó separadamente.

Art. 37. Los multados por infracción de bandos que sean insolventes, sufrirán por vía de sustitución el arresto, según lo prevenido en el artículo 504 del Código penal.

El arresto por vía de sustitución no podrá exceder de los días por que pueden imponerse aquellas autoridades respectivamente, conforme á lo prescrito en el artículo anterior.

Art. 38. La autoridad militar podrá corregir también del mismo modo y en la misma forma que la civil y con la limitación consignada en el artículo 35 las infracciones de sus bandos en el período de estado de guerra, sin que puedan la superior del distrito y de la provincia señalar pena mayor que la de 15 días de arresto y 250 pesetas de multa, las dos á la par ó una sola; y las demás autoridades militares ocho días de arresto y 125 pesetas en la propia forma.

Caso de ser insolventes los multados, sufrirán el arresto por vía de sustitución, sin que pueda exceder el que por tal concepto se imponga de los ocho ó 15 días señalados respectivamente en este artículo.

Sección segunda.

Art. 39. Las autoridades civiles y militares llevarán un libro en el que extenderán las providencias que acuerden, imponiendo gubernativamente la multa y el arresto expresados, haciendo constar en ellas claramente el motivo de su imposición.

La providencia se hará saber gubernativamente al infractor por los dependientes ó subordinados de aquellas autoridades, entregándole copia literal de la misma. El penado firmará el recibo de esta copia al pie de la diligencia la que ha de extender el encargado de hacerla saber dicha providencia; si no supiere, ó no pudiese firmar, lo verificarán dos testigos requeridos verbalmente por el encargado de hacer saber la providencia.

Art. 40. Si á la primera diligencia en busca no fuere hallado el penado en su domicilio, se hará saber á cualquiera de los familiares mayor de 21 años que moren en la casa, con entrega de la copia literal de la providencia, y guardándose las reglas establecidas en el artículo anterior.

Si ni el penado ni ninguno de los familiares se encontrasen en la casa á la primera diligencia en busca, se entenderán dichas diligencias con cualquiera de los vecinos más inmediatos ó personas que habiten en las casas de estos y sean familiares mayores de 21 años.

Art. 41. Las providencias acordadas por las autoridades superiores civiles de la provincia, la militar del distrito y el comandante militar de una provincia son ejecutivas. Contra ellas no cabe recurso de alzada. Los infractores pueden, sin embargo, entablar recurso de revisión ante las mismas autoridades, cuyo fallo en este caso será ejecutorio.

(Se continuará.)

Imprenta de EL PENSAMIENTO ESPAÑOL,

Pelayo, 34,

á cargo de R. Labajos y Arenas.

SECCION DE ANUNCIOS.

ENFERMEDADES CLOROSIS ANEMIA

Alivio pronto y efectivo por medio de los Jarabes de Bepo fosfato de sosa, de cast y de hierro del Dr. CHURCHILL. Precio á francos el frasco en París. Exíjase el frasco cuadrado, la firma del Doctor CHURCHILL y la etiqueta marca de fábrica de la Farmacia SWANN, 42, r. Castiglione, París.

Las Tablillas Pectorales del Doctor CHURCHILL contra la tos se venden, al precio de dos francos caja, en casa de todos los depositarios de los Jarabes de Bepo fosfatos.

En Madrid, por mayor, agencia franco-española, Sordo, 31. Por menor, Sres. Borrell hermanos, Moreno Miquel, Escolar, Sánchez Ocaña y Ortega. (A. 3.665.)

NOVISIMO MES DE MAYO; POR D. Miguel Martínez y Sanz, Presbítero, con licencia de la autoridad eclesiástica.

Un librito de 240 páginas. Contiene para cada día del mes una meditación sobre uno de los misterios de la vida de la Santísima Virgen. Un ejemplar, una exhortación, un ejercicio y una oración á la Señora. Además contiene todas las canciones que suelen cantarse en el mes. Las meditaciones pueden servir de pláticas.

Se vende á 4 rs. en las librerías de Olamendi y D. Mércos Sánchez. También se envía por el correo pidiéndolo á su autor (Plezuza de la Paja, núm. 9) y remitiendo su importe en sellos ó libranza. Los que quieran doce ejemplares recibirán uno gratis. (Núm. 751.—3 v.)

LOS MASONES SIN DISFRAZ, O LA Francmasonería ante la Sociedad, la Religión y el Estado.

Un tomo 6 rs. en Madrid y 7 en provincias. Los pedidos, á D. Miguel Olamendi, calle de la Paz, núm. 9.

(Núm. 749.—3 v.)

PILDORAS DE BLANCARD

CON IODURO DE HIERRO INALTERABLE

APROBADAS POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS, Y ADOPTADAS EN 1866 PARA EL FORMULARIO LEGAL FRANCÉS, EL CODEX, ETC.

Participando de las propiedades del IODO y del HIERRO, estas Pildoras se emplean especialmente contra las escrófulas, en el principio de la tisis, en la debilidad de temperamento, así como en todos los casos (colorado pálido, etc.) en donde es necesario renovar la sangre, sea para enriquecerla y darle abundancia normal, sea para iniciar ó regularizar su curso.

N.B.—El Ioduro de hierro impuro ó alterado es un medicamento inútil, irritante. Como prueba de pureza y autenticidad de las verdaderas Pildoras de Blancard, exíjase nuestro sello de plata reactiva y nuestra firma estampada al pie de una etiqueta verde. — Desconfíese de las falsificaciones.

Véndese en las principales Farmacias.

Venta por mayor: Madrid, Agencia franco-española, calle del Sordo, 31; J. Simon, calle del Caballero de Gracia, 3; por menor: Sres. Borrell, hermanos; Escolar; Moreno Miquel y Sánchez Ocaña; En provincias, en las principales farmacias.

LA PREDICACION POPULAR

POR MR. DUPANLOUP,

OBISPO DE ORLEANS.

TRADUCIDA POR D. L. R.

BAJO LA DIRECCION

DEL DR. D. BENITO SANZ Y FORÉS,

PREDICADOR CÉLEBRE y Abreviador de la Nunciatura Apostólica.

Esta obra interesantísima, no solo para Predicadores, sino también para los que ejercen la cura de almas, y cuyo mayor elogio le constituye el nombre de su eminente autor, se vende elegantemente encuadrada en rústica con el retrato de Mr. Dupanloup, á 40 rs. franco de porte, en casa de R. Labajos, calle de la Cabeza, núm. 27, á quien pueden dirigirse los pedidos, acompañando libranzas del giro mútuo del Tesoro ó sellos de franqueo.

VERDADERAS INYECCIONES Y CAPSULAS RICORD

DE CH. FAVROT

Farmacéutico, 109, rue Richelieu, París

CURACION CERTA

Gonorrreas antiguas ó recientes

Para evitar las falsificaciones, exíjase el nombre de CH. FAVROT

Único poseedor de las fórmulas auténticas.

Depositos. París, 109, rue Richelieu.

En Madrid, casa de los Ss. Borrell hermanos;

Escorial: Moreno Miquel; Sánchez Ocaña;

doctor Simon. — La Agencia franco-española,

31, calle del Sordo sirve los pedidos. Precio en

España: Inyección, 16 rs. Capsulas, 25 rs.

En París, Dethan, farmacéutico, Faub.

Saint-Denis, 90. — En Madrid, J. Simon,

caballero de Gracia, 3; Borrell hermanos

Puerta del Sol; Sánchez Ocaña; Moreno

Miquel, farmacéuticos; la Agencia Franco-

española; Sordo, 31. — Las Perforame-

rias, Atocha, 39, y Carrera de S. Gerónimo, 34,

de Frera, calle del Carmen, 1.

AVISO IMPORTANTE.—Los medic-

nos se envían á todas partes con el mayor

secreto y celeridad. Tratamiento por

correspondencia en todos los idiomas,

con tal que vengan las cartas acompaña-

das de los fondos.

Dirigirse al Dr. LA-MERT, 37, Bedford

square, Londres. LA PRESERVACION

PERSONAL se vende en Madrid en la

agencia franco española, 31, calle del

Sordo. Su precio, 12 rs.

(A. 2.203.)

GASTRALGIA ERUCTOS DIGESTIONES DIFICILES DOLORES DE ESTOMAGO DISPEPSIA VOMITOS

CURACION SEGURA CHASSAING

Con el VINO, las PILDORAS ó el JARABE bi-digestivos de CHASSAING. Estas tres preparaciones cuyo sabor es de los más agradables, son las únicas que contienen los dos agentes naturales é indispensables para una buena digestión (la Pepsina y la Diastasa) y que han obtenido de la Academia de medicina de París, las más favorables recomendaciones.

PARIS, 2, Avenue Victoria. — Precios: VINO, 23 rs.; — Pildoras: 44 rs.; Jarabe, 16. — En Madrid por mayor, Sordo, 31, Calle del Sordo.

Depositos: Borrell hermanos, Simon, Moreno Miquel, Escolar, Sánchez Ocaña.

Vino, 22 rs. — Pildoras, 14 rs. — Jarabe, 16 rs.

Opotro, Londres, París, Burdeos, 1862, 1863, 1867, 1868.

DENTIFRICOS